

Disputas por la igualdad a partir de la crisis COVID-19 en Argentina

*Gabriel Kessler, Gonzalo Assusa,
Martina Moriconi y Daiana Ailén Monti*

Introducción

¿Cómo impactó la crisis COVID-19 sobre los consensos distributivos vigentes en la Argentina? ¿Se abre una oportunidad para construir pactos redistributivos novedosos en un contexto de pugna por determinar quién pagará los costos de esta crisis? Llamamos consensos distributivos a aquellos procesos hegemónicos en los que se construyen las ideas socialmente aceptadas sobre quiénes y cuánto deben aportar y recibir recursos en la sociedad. La pandemia en Argentina disparó, justamente, procesos en los que se debatieron el peso de los impuestos, la distribución de riquezas entre capital y trabajo, el impacto de los “costos laborales” en la generación de empleo, la tensión entre gasto social y déficit fiscal, el nivel de concentración económica considerada aceptable y la legitimidad de las políticas sociales.

En efecto, consideramos a la desigualdad como un proceso sociohistórico y no como una mera foto o estado coyuntural, por lo cual es preciso un abordaje de su dimensión dinámica y siempre a

merced de equilibrios inestables. Los consensos distributivos son producto de disputas históricas, una dimensión de la hegemonía y la dominación siempre sujeta a ser cuestionada, en particular en los momentos de crisis. Por lo pronto, durante el 2020 se puso en debate en Argentina y varios países de la región la implementación de un ingreso universal, impuestos a la riqueza, medidas de protección a los trabajadores, aumentos de jubilaciones y modelos de equidad intergeneracional. Asimismo, se produjeron conflictos por la tierra y la vivienda, que han sumado al debate las reformas agrarias y la distribución de tierras fiscales y grandes propiedades (véase, por ejemplo, los trabajos de Bottan et al., 2020; Busso y Messina, 2020; CEPAL, 2020; CEPAL-OIT, 2020).

A pesar de que en momentos de crisis tales consensos suelen ser cuestionados, no cambian necesariamente las ideas de justicia distributiva y las preferencias políticas de la sociedad. Nuestra pregunta y nuestras hipótesis se fundaron, justamente, en que, al menos durante el primer semestre de la pandemia, el advenimiento de una crisis con centro en la cuestión sanitaria implicó –en términos de gestión política y de agenda mediática– un punto de inflexión en relación con la valoración del sector público y del mercado.¹ En perspectiva, a finales de 2021, la trascendencia de este proceso nos parece mucho más incierta y, por lo tanto, la relevancia de nuestro interrogante tiene aún más vigencia.

¿Por qué es importante estudiar los consensos distributivos? En primer lugar, porque disminuir la desigualdad es un objetivo muy complejo y exigente, y porque requiere revisar y evaluar cada inversión pública y privada, cada medida de gobierno, plan, programa y preguntarse cómo gravita en la mayor o menor desigualdad de clases, géneros, grupos étnicos, territorios y franjas de edad. La experiencia histórica nos muestra que prácticamente

¹ Véase, por ejemplo, las publicaciones del Programa Argentina Futura que resumen estos debates: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_futuro_despues_del_covid-19_0.pdf y https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/libro_abierto_del_futuro-22-07.pdf

ninguna intervención pública es neutra en términos de igualdad y desigualdad. Más recientemente, la experiencia de los gobiernos posneoliberales nos revela que hubo coaliciones sociales para atenuar la exclusión, pero no necesariamente para disminuir la desigualdad en sentido estricto, en la medida en que esto requiere esfuerzos, mutaciones y distintos conflictos en la estructura social (Benza y Kessler, 2020). Por ello es preciso preguntarse sobre un conjunto de ideas que no parecen tan visibles sobre los consensos distributivos, sobre lo justo y lo injusto, sobre las representaciones del lugar de cada grupo social en la sociedad y sobre el modo de articular dimensiones objetivas y subjetivas del conflicto distributivo.

Por ello indagar sobre los consensos distributivos es una forma de acercarse a algunos de los interrogantes nodales de los tiempos que corren: ¿Quiénes pagarán los costos de la pandemia? ¿El capital y los sectores dominantes? ¿O el trabajo y los sectores populares? ¿Por qué deberían hacerlo unos u otros? ¿Bajo qué principio de justicia? ¿Qué sucedía con estas preguntas antes de la pandemia?

¿Qué sabemos de la desigualdad en la sociedad argentina actual?

¿Cómo caracterizar la situación de igualdad y desigualdad de la Argentina actual?

Se trata de una tarea compleja porque es preciso articular distintas variables.² En primer lugar, se trata de un país que contaba con los menores índices de desigualdad hasta los años noventa en el contexto latinoamericano. Luego comienza un ciclo de incremento de la desigualdad de ingresos con un pico en 2001, un proceso

² Para un/a lector/a con interés en una bibliografía básica sobre el período y la desigualdad en distintas dimensiones, ver Barreto, 2012; Beccaria y Maurizio, 2012; Brizuela y Tumini, 2008; Cruces y Gasparini 2009a, 2009b; Gras y Hernández, 2013; Lindemboim, Kennedy y Graña, 2010; Nun 2011a, 2011b; Salvia, 2012; Sili y Soumoulou 2011.

de recuperación entre 2003 y 2010 y luego una tendencia al estancamiento y nuevamente al incremento de la desigualdad del 2015 hasta el presente, 2021. Ahora bien, si la mejora de la distribución individual del ingreso durante la primera década del siglo XXI fue evidente, los cambios en la distribución funcional del ingreso (entre trabajo y capital) fueron mucho más tenues y hasta ambiguos, sin contar que la acumulación económica de las elites no interrumpió su marcha ni se vio afectada en profundidad en ningún punto del período (Benza y Kessler, 2020).

Pero esto es sólo una cara del problema. Veamos las otras que afectan al conflicto distributivo: la inflación endémica, con picos de megainflación y episodios hiperinflacionarios periódicos y, más en general, la inestabilidad económica crónica es una fuente de malestar social persistente. Los hogares se ven expuestos a los vaivenes económicos, la imposibilidad de ahorrar y la depreciación constante de sus ingresos, la casi inexistencia de crédito y las tasas usurarias: un conjunto de vicisitudes constantes que opaca en gran medida a los indicadores de igualdad. Una de sus más terribles expresiones: las tasas de pobreza que desde los años ochenta se ubican desde un 25 % de la población hasta picos del 60 % en momentos de crisis más álgidas, y que en la pandemia sobrepasó el 40 % de las y los habitantes del país.

En este contexto tan inestable, ¿Cómo hacer un balance de estas primeras décadas del nuevo milenio? En líneas generales, al compararnos con la región latinoamericana en el período posneoliberal (Kessler, 2015), nuestro desempeño en temas como la disminución del coeficiente de Gini y de la pobreza o el nivel de inclusión de nuestro sistema educativo, el incremento de las jubilaciones y la cobertura de salud ubica al país en un lugar satisfactorio. En otros, los resultados no fueron favorables. En concreto, fue un período muy bueno en lo que respecta a la extensión de coberturas sociales, positivo también en la llamada “re-regulación de relaciones de trabajo”, pero resulta menos favorable a medida que nos alejamos del ámbito

de influencia directo del mercado de trabajo, en particular, el urbano y el más protegido.

En efecto, si las principales victorias de los gobiernos progresistas pueden asentarse en las columnas de la regulación del mercado de trabajo y de las políticas de transferencia de ingresos, la impresión de una mayor progresividad en el sistema tributario o la ampliación del acceso a bienes estratégicos como la tierra no acompañaron de igual manera esta tendencia redistributiva en cuanto a ingresos económicos.

En otras dimensiones: hubo aumentos de la cobertura educativa en todos los sectores, pero se mantuvieron brechas muy importantes en la calidad educativa. También los indicadores de salud mejoraron, pero con amplias brechas de acceso de las distintas clases sociales. Un problema central es la cuestión habitacional: la presencia de villas y asentamientos y de población con déficit habitacionales son muy importantes. Se destaca sobre todo el incremento de los déficits cualitativos: no solo la carencia de vivienda, sino también las malas condiciones de habitabilidad, el hacinamiento, la falta de servicios básicos, los terrenos inundables o contaminados, etc. Asimismo, cuando se observan las diferencias regionales, hay un incremento de las llamadas “brechas de desarrollo” entre las zonas centro y Sur –las más desarrolladas– y las más relegadas, como el Noroeste y en particular el Noreste argentino (ver los trabajos en Piovani y Salvia, 2018).

Los años de 2015 a 2021 fueron los de una erosión paulatina de lo logrado en términos de disminución de la desigualdad en los años previos, con una pérdida constante del valor del salario y de los puestos laborales de calidad. Así las cosas, la crisis generada por la pandemia COVID-19 también puso bien en evidencia las limitaciones en las mejoras del mercado de trabajo durante el período de la posconvertibilidad. Si bien los indicadores de informalidad laboral mejoraron en el período post-2003, como mínimo un tercio de la fuerza de trabajo está empleada en condiciones precarias y sin acceso a derechos básicos. El corte abrupto que se produjo durante el período de cuarentena y aislamiento en 2020 sacó a la superficie una

estructura persistente de segmentos que, con tímidos cambios en sus proporciones, expusieron de manera profundamente desigual a vastos sectores de la población a sobrevivir la pandemia munidos de cantidades y tipos de recursos profundamente diferentes: acceso a cobertura médica, continuidad del salario, acceso a fuentes de ingreso alternativas, acceso a servicios bancarios y financieros, etc. (Assusa y Kessler, 2020b).

En pocas palabras: Argentina es un país con considerables y perdurables niveles de desigualdad en muchas dimensiones de su vida social, pero también con una extensa tradición de pretensión de igualdad y con una cercana experiencia de achicamiento de las brechas sociales, de ampliación de los accesos y de construcción de nuevos derechos y legitimidades. La igualdad como promesa es siempre frágil: es una noción exigente y rara vez –o solo en forma temporaria– puede verse realizada. No es propiedad exclusiva de ningún sector y es terreno de disputas. Pero en tanto motor de luchas y fuente de descontento, es un plafón para nuevas reivindicaciones y procesos futuros de igualación. La sociedad argentina, o buena parte de sus capas, se ha resistido a naturalizar la desigualdad, recuperando lo que Juan Carlos Torre llamó una “pasión por la igualdad”. Esto es, sin duda, un activo que, más allá de la coyuntura, permite amenguar el pesimismo que nos genera la experiencia de nuestro presente.

¿Qué sabemos sobre la percepción de la desigualdad y las preferencias redistributivas?

Si el balance sobre la evolución estructural de la desigualdad en nuestro milenio es complejo, el paso a la dimensión subjetiva o experiencial complica aún más las cosas. En primer lugar, por una tensión que atraviesa en conjunto a las investigaciones en este campo: el problema del *realismo*. El salto de la medición estadística de la desigualdad a la percepción subjetiva de la población no es nunca mecánico ni transparente. La desigualdad se vive, se experimenta, se

piensa y se diagnostica siempre de manera situada: desde una posición social, en una trayectoria biográfica, y con la lente de matrices culturales e ideológicas particulares. Entonces, ¿cuán realistas somos al percibir la desigualdad?

En segundo lugar, el paso de la percepción a la preferencia política tampoco es lineal. Depende de imaginarios y sistemas discursivos más amplios sobre lo socialmente deseable, relatos normativos sobre la autonomía, la libertad y la justicia distributiva. ¿Quiénes se esfuerzan? ¿Quiénes reciben ayuda? ¿Quiénes son los privilegiados? ¿Quiénes los poderosos? ¿Quiénes merecen lo que tienen?

Una pregunta común en la bibliografía especializada en la percepción de las desigualdades es quiénes son los sujetos sociales identificados como los protagonistas de la puja distributiva: ¿empresarios y trabajadores? ¿ricos y pobres? ¿productivos y dependientes? Como muestran distintas investigaciones en nuestro país y el mundo, este interrogante resulta central para comprender el modo en el que la desigualdad social es tolerada socialmente en ciertas condiciones: en la medida en que se perciba su “eficacia global” (Kessler, 2007) o su funcionalidad para el desarrollo de la comunidad. En este sentido se aplica la idea de que sería injusto o desmotivador que “todos ganaran lo mismo”, dado que son desiguales los costos de formación para el trabajo. Esta legitimación de la desigualdad, por ello, se asentaría más en el valor de la justicia distributiva que en el de la igualdad propiamente dicha. Lo contrario sucede con las desigualdades extremas: en la medida en que estas rompen con los mecanismos de integración comunitaria o sistémica y amenazan la paz social, pierden su legitimidad (Grimson, 2015; Kessler, 2019, 2019b; McCall, 2013; Sachweh, 2012).

De hecho, como mostraremos en la primera sección, los ricos no son los primeros mencionados como privilegiados no meritarios (es más importante la mención a políticos y funcionarios públicos), y la desigualdad entre ricos y pobres no es identificada entre las peores expresiones de la desigualdad en nuestro país. Como planteamos al principio: las conexiones entre realidad distributiva, percepción y

evaluación de las desigualdades y preferencias políticas no son nunca lineales (PNUD, 2021; Choi, 2019).

Siguiendo esta línea intuitiva, Evans, Kelley y Kolosi (1992) sostienen que las personas de estatus social más bajo son quienes más perciben la desigualdad, dado que en su experiencia son quienes más la padecen y por lo tanto la sienten y la critican. Desde nuestra perspectiva teórica la percepción y la crítica o juicio son dimensiones relacionadas, pero no linealmente. McCall (2013), Castillo et al. (2019) y Segovia y Gamboa (2015) sostienen argumentos en la misma dirección, aunque estas últimas autoras plantean matices: no genera el mismo efecto el nivel educativo (a más nivel educativo, mayor percepción de la desigualdad) que el estatus social subjetivo (a mayor estatus social subjetivo, menor percepción de la desigualdad).

Saraví (2015) argumenta en contra del supuesto de que los más pobres sean quienes más cuestionan la desigualdad: desigualdad y descontento social no están mecánicamente conectados. La experiencia social de la explotación y la subordinación, de igual modo, no es transparente y autoevidente para quienes la viven. Rodríguez (2014), en cambio, sostiene que, a mayor estatus social, mayor percepción de las desigualdades. Probablemente el factor que más pese en su análisis sea el nivel educativo como elemento de formación, recursos simbólicos y conciencia crítica sobre la desigualdad. Por otra parte, su problematización de la cuestión distributiva se concentra en los sectores que más acumulan o “ricos”, y no considera tanto el polo opuesto de la relación: los “pobres”.

Cruces y Tetaz (2009) proponen una posición intermedia, aunque focalizados no tanto en las percepciones como en las preferencias redistributivas: los de mayor nivel educativo (factor “objetivo”) y quienes se identifican ideológicamente con la izquierda apoyan más las políticas redistributivas, mientras que quienes se perciben por debajo de su posición social objetiva (factor “subjetivo”) tienden a apoyar menos estas políticas. Cuneo (1996) también sigue esta línea, al señalar que las personas de mayor nivel educativo (coincidentalmente con su tendencia a identificarse subjetivamente con la clase media

alta y alta) eligen modelos de sociedad más igualitarios como ideales. Otros autores han complejizado el análisis, sin encontrar relaciones estadísticamente significativas entre ingresos económicos y percepción de conflicto entre ricos y pobres, pero incorporando la perspectiva étnica, racial y generacional para proponer líneas explicativas (Scalon, 2004).

La bibliografía especializada ha generado algunas hipótesis para explicar estos procesos. La brecha o abismo de empatía (Sachweh, 2012), asociados con los procesos de fragmentación social (Saraví, 2015; 2016; Bayón, 2015), constituyen, probablemente, las líneas de exploración más promisorias en esta dirección. Estas teorías suponen que la coexistencia separada de mundos aislados como formato dominante de la sociabilidad contemporánea tiene un fuerte impacto en las preferencias redistributivas de nuestras poblaciones (fundamentalmente a partir de procesos de interacción social como el no-reconocimiento y el des-encuentro). En palabras de Dubet (2015), si el otro es percibido como extranjero o alteridad radical, la crisis de los lazos de solidaridad socava la legitimidad de dispositivos políticos de achicamiento de las brechas de desigualdad, que se fundan en cierto imaginario de comunidad o, al menos, de integración sistémica (Kessler, 2007; Grimson, 2015).

Existen también algunas reservas o discusiones acerca de la profundidad de los procesos de fragmentación: ¿Esto significa que han dejado de existir las experiencias sociales compartidas con otros y otras? En caso de que este tipo de experiencias sobrevivan ¿Cuán intensas son? En términos genéricos, los encuentros interclase siguen existiendo de diversas formas, aunque estas interacciones se dan en el marco de universos morales distantes y recíprocamente invisibilizados. En este marco, la crisis de solidaridades (Dubet, 2015) intensifica los procesos de reproducción de la desigualdad, generando círculos de sociabilidad endogámicos y aislados (Bayón y Saraví, 2019).

Otro debate que aporta a la comprensión de estos procesos son las discusiones críticas en torno a la idea de “conciencia dividida”

(Puga Rayo, 2011). Aquellas disonancias que identificamos y señalamos desde una perspectiva analítica, según Puga Rayo, serían menos explicables por la colisión entre ideologías contradictorias, y más ancladas en el conflicto entre principios normativos no-legitimantes y actitudes prácticas legitimantes. En este sentido, para este autor se trata de algo distinto que una disonancia o conciencia dividida, dado que la igualdad y el mérito pueden articularse como ideológicamente complementarios. Lo que hay, en última instancia, es una articulación coherente de criterios distributivos diversos: al evaluar la realidad y su práctica los actores renuncian a lo justo para actuar sobre lo posible y evitar procesos socioemocionales de irritación y ansiedad, aun cuando los mecanismos ideológicos resulten impotentes para generar procesos de integración social.

Sin dudas este desarreglo entre principios normativos y principios prácticos puede resultar una idea central para proponer explicaciones sobre los factores que organizan los polos de las disputas distributivas, teniendo a la igualdad de ingresos muy a menudo como punto de contacto o consenso entre agrupamientos en conflicto.

Una propuesta metodológica para abordar las disputas distributivas

A partir de la lectura y el diagnóstico sobre el actual estado del arte en materia de estudios sobre cuestiones distributivas, esta investigación apostó a métodos mixtos y a innovar metodológicamente para producir datos y conocer más en profundidad tres dimensiones de nuestro problema.

1. En primer lugar, nos propusimos identificar y caracterizar los *guiones político-mediáticos* que surgen de la cristalización de los procesos hegemónicos que conforman los consensos distributivos en la actualidad. Para ello, apelamos a técnicas de *big data* y *machine learning*, aplicadas al análisis de medios

digitales y plataformas. El objetivo fue reconstruir un cuadro de los debates, controversias, alineamientos, relatos y estrategias discursivas en torno a los tópicos de corte distributivo en el último año.

2. En segundo lugar, nos abocamos a reconstruir el panorama de opinión pública, consensos y preferencias distributivas hasta la llegada de la pandemia COVID-19 al país y, en algunos casos, durante 2020. Para ello, emprendimos procesamientos estadísticos de tres encuestas de opinión internacionales aplicadas en Argentina. Con el uso de técnicas estadísticas describimos tendencias generales de opinión pública en materia distributiva en la población y construimos perfiles o tipologías. Esto nos permitió formular hipótesis sobre las distintas posiciones de los agrupamientos en la disputa distributiva al mismo tiempo que complementar el análisis de nuestro material de campo cualitativo con las tendencias generales deducidas de las encuestas.
3. En tercer lugar, buscamos comprender e interpretar los relatos lego sobre la cuestión distributiva y analizar el impacto de la pandemia en estos posicionamientos: las imputaciones causales, los principios de justicia y las diversas modulaciones evaluativas y de preferencias políticas en materia de desigualdad que movilizan distintos tipos de agentes sociales. Así, realizamos un trabajo de campo cualitativo de 52 entrevistas en profundidad, para cuyo análisis combinamos un trabajo más inductivo articulado con el procesamiento estadístico que detallamos previamente, con un análisis asistido por herramientas informáticas de minería de texto.

Nos guiaban dos intuiciones fundamentales. La primera es que los análisis disponibles sobre opinión pública en torno a cuestiones distributivas nos permiten identificar –por momentos– grandes disputas de imaginarios, economías morales o ideologías en torno a la

desigualdad, pero todavía existen ciertas vacancias en análisis profundos y complejos que permitan caracterizar los agrupamientos polarizados tanto como las posiciones que no están polarizadas.

La segunda es que el modo de interrogar a los agentes lego en los estudios en materia distributiva ha llevado frecuentemente a generar instrumentos de producción de datos que disponen a captar discursos normativos, pero desanclados del pragmatismo propio de la práctica social y su lógica. En este sentido, inspirados en experimentos de ruptura, hemos intentado proponer diálogos en clave de “la sábana corta”: modos de interrogar, entrevistar y discutir que tensionen las opciones, imbricando a los agentes en la complejidad de la disputa distributiva, productiva, fiscal y redistributiva.

Hallazgos y discusiones

Los aportes de esta investigación pueden organizarse en torno a dos grandes preguntas. La primera es cómo se organizan los polos/agrupamientos/perfiles o tipologías de la disputa distributiva en Argentina. La segunda es hasta qué punto la pandemia transformó los consensos distributivos en nuestro país.

¿Cómo se organizan los polos de la disputa distributiva?

Nuestro trabajo muestra que en la población lego existen acuerdos en torno a la deseabilidad de niveles mínimos (y no tan mínimos) de igualdad. Así, las tensiones fundamentales de las disputas distributivas no se dan entre quienes defienden el ideal de igualdad social y quienes abogarían por la desigualdad como un mecanismo de incentivo a la iniciativa económica individual.³ En cambio, el clivaje de

³ Ver, como ejemplo, algunas notas en medios masivos de comunicación en 2016: <https://www.lavoz.com.ar/opinion/no-importa-la-desigualdad/>; <https://www.lanacion.com.ar/cultura/es-realmente-deseable-una-sociedad-igualitaria-nid1864869/>;

los posicionamientos políticos en torno a la desigualdad que encontramos en nuestro material empírico está anclado en las nociones e ideas acerca de cómo deben relacionarse Estado o sector público y economía o mercado. En particular, en ideas o, como veremos, carencia de ideas, sobre el modelo productivo argentino.

La carencia de un modelo de desarrollo satisfactorio, particularmente reconocible en el ya lejano agotamiento del paradigma industrialista, ha dejado a los sectores progresistas sin un horizonte productivo claro. En concordancia, la visión de las elites empresarias es muy negativa para estos sectores: desprovistas de un rol en el sistema económico, se las percibe carentes de función social. Por su parte, las franjas en pro del Mercado enuncian la necesidad de competencia, inversión y desarrollo y, en concordancia, una mirada más positiva sobre los empresarios productivos, a la par que una mirada negativa de las elites financieras. Sin embargo, a la hora de definir los lineamientos de ese modelo, también carecen de un horizonte claro.

Al fin y al cabo, mientras unos depositan todas sus expectativas en el rol redistribuidor del Estado –aunque sin saber cómo se generarán los recursos necesarios–, otros las depositan en un presunto incentivo a la producción y a las empresas, pero con dificultad para precisar el rumbo. No es llamativo: en rigor, ni la clase dirigente ni las elites intelectuales saben a ciencia cierta hacia dónde orientarse y las evidencias de las últimas décadas lo muestran. Todo sucede como si, luego de la crisis del modelo de industrialización hace seis décadas, siguiéramos navegando en aguas turbulentas sin avizorar ningún puerto. Una vez más, no somos la excepción: una zozobra más o menos similar está sucediendo en toda América Latina, con contadas excepciones. Cabe recordar que los mejores años de disminución de la desigualdad del período progresista se nutrieron del buen precio de las *commodities* y no de un aumento de la industrialización en la región.

<https://www.nytimes.com/2016/01/15/universal/es/opinion-paul-krugman-es-necesaria-tanta-desigualdad.html>

La reconstrucción histórica a lo largo del siglo XXI nos permitió observar, además, hasta qué punto esta disputa en torno al lugar del Estado y la economía aparecía tensionando posiciones incluso en los momentos de hegemonía neoliberal y posneoliberal en Argentina. En rigor, también encontramos una tercera posición que llamamos *condicionales*, algunos más cercanos a los perfiles pro-Mercado y otros más cercanos a los pro-Estado, pero que tienen como punto en común centrarse en el “modo” (de ahí también su nombre) por medio del cual la acción estatal y del mercado pueden ser preferibles en un caso o en otro en función de la *forma* en que se ejecuten las intervenciones.

Como planteamos, encontramos tres grandes perfiles o tipologías, que resultan móviles y relativamente inestables, y que cristalizan de diversos modos en cada época. El primer polo, afín a la intervención estatal, es también el que mayor preferencia presenta por una fiscalidad progresiva y una cobertura social amplia, aunque esto no lo ata a considerar acriticamente esos procesos en Argentina. El segundo polo, afín al mecanismo redistributivo del mercado, es resistente a los impuestos y manifiesta una preferencia por formatos de política social focalizada, puntual en el tiempo y con orientación hacia la activación económica. Su visión crítica tampoco los lleva a construir posturas globales libertarias ni nada similar. Se trata de otro tipo de expectativas y principios de justicia vinculados al campo estatal. Uno y otro perfil presenta tanto preocupación y percepción, como evaluación crítica de la situación actual de la desigualdad en el país. Una diferencia que nos interesa remarcar es la ausencia de tematización de la cuestión económico-productiva como parte del relato distributivo en el perfil pro-Estado: este puede leerse como uno de los puntos fundamentales a recuperar en la definición de lineamientos para la acción en la agenda política de la igualdad.

El tercer perfil se compone fundamentalmente por agrupamientos de posiciones *condicionales*, en lo redistributivo, pero también en lo fiscal, e incluso, por momentos, con cierto desacople o desenganche de los debates distributivos en Argentina.

Todos y cada uno de estos perfiles implican agrupamientos heterogéneos, en su composición socioeconómica interna y en su variabilidad discursiva, y esto sucede tanto antes como después de la pandemia. Comprender el carácter de “tipo ideal” de estos agrupamientos es fundamental para diseñar mejores y más potentes campañas de comunicación en la búsqueda de generar consensos en torno a la igualdad. El discurso asociado a cada uno de estos perfiles hace sistema a partir de una compleja y contingente articulación entre modelos de desarrollo económico, modelo fiscal y estrategia redistributiva. Que hayamos encontrado configuraciones homólogas en distintas fuentes de datos, pero también en distintos formatos metodológicos (cuantitativo y cualitativo) habla de la consistencia de este hallazgo.

¿La pandemia transformó los consensos distributivos?

A pesar del mandato de la novedad que rigió los primeros análisis sobre la pandemia en 2020, el correr de los meses generó cierto consenso en torno a la idea de que más que crear dinámicas societales puramente nuevas, la crisis del COVID-19 tendió a acelerar procesos actuando sobre estructuras socioeconómicas y político-cognitivas ya existentes.

Como regla general, la experiencia de la pandemia se procesó social y simbólicamente mediada por el tamiz de los paradigmas políticos lego preexistentes, que aquí hemos reconstruido como perfiles o tipologías de posicionamientos frente a la desigualdad.

Sin embargo, las condiciones sociales desiguales de los agentes (particularmente su situación y posición en el plano sociolaboral) habilitó tanto como clausuró que la experiencia de la pandemia conmoviera, relativizara, contextualizara o reafirmara componentes de dicho paradigma, de forma condicional o coyuntural.

Si bien la pandemia no hizo entrar en una crisis sistémica a los consensos distributivos en Argentina, sí implicó una oportunidad de revisión reflexiva de ciertas preferencias y una necesidad de

explicitar y visibilizar los posicionamientos más polarizados en la disputa distributiva. En este contexto, los consensos distributivos no saldrán indemnes de este hecho social total.

El presente capítulo se organiza en cuatro secciones. En la primera sección construimos las tipologías de posicionamientos frente a la desigualdad basadas en el análisis estadístico de encuestas de opinión. En la segunda sección reponemos los guiones mediáticos y del debate distributivo a partir del análisis de los discursos circulantes en medios digitales y redes sociales en torno a políticas redistributivas durante 2020. En la tercera sección analizamos los relatos y los discursos de una diversidad de agentes sociales que entrevistamos en busca de profundizar la caracterización de modulaciones, juicios y posicionamientos políticos graduales y particulares en torno a la disputa distributiva. Finalmente, en el último apartado sintetizamos nuestros principales aprendizajes sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los consensos distributivos en Argentina y sobre los desafíos a futuro, tanto en la agenda de investigación como en la agenda de intervención pública.

Opinión pública, desigualdad y preferencias políticas distributivas en la Argentina contemporánea

Para evaluar el impacto de la pandemia en los consensos distributivos es necesario establecer una línea de partida. Exploramos tres encuestas de opinión diferentes –Latinobarómetro (LB), World Values Survey (WVS) y Barómetro de las Américas (BA) – con el objetivo de reconstruir el estado y las tendencias de percepciones, evaluaciones y preferencias redistributivas en Argentina al momento de la llegada de la pandemia COVID-19 a nuestro país.

Por cuestiones de espacio solo presentaremos aquí los datos provenientes de LB, la única de las tres encuestas que tiene datos publicados para 2020, algo que nos permitió analizar algún tipo de impacto específico de la crisis sobre la opinión pública en torno a

políticas redistributivas y desigualdad, aunque la mayoría de las variables que analizamos a partir de LB son parte de un nuevo bloque del cuestionario que se incorporó recién en la última medición. En futuras publicaciones mostraremos en detalle las complejidades de las técnicas de procesamiento y los resultados para cada una de estas fuentes de datos.

En primer lugar, analizamos las principales tendencias en esta materia, identificando los puntos de consenso sobre los que se sostienen los pactos distributivos y las principales disputas en torno a la igualdad. A continuación, analizamos qué tipo de condiciones o posiciones sociales y políticas favorecen posicionamientos más o menos críticos ante las desigualdades y ante las políticas redistributivas. Para esto, construimos perfiles (al modo de tipos ideales) haciendo uso de técnicas de procesamiento estadístico multidimensional con cada una de estas bases de datos.⁴ El objetivo de este procesamiento fue comprender, en un sentido más complejo, las condiciones de producción de los discursos y relatos que analizaremos en la sección final del capítulo. Así, la construcción de perfiles de preferencias políticas en torno a la igualdad va de la mano y está dialécticamente definida por la comprensión de las modulaciones internas de los agrupamientos, sus heterogeneidades, sus puntos de consenso general y de disenso entre perfiles.

Construimos tres perfiles con cierta robustez y estabilidad en cada una de estas fuentes de datos: un perfil pro-Estado, uno pro-Mercado y uno de Condicionales. Son estos los posicionamientos que, entendemos, estructuran las disputas distributivas en nuestro país, de manera trascendente –en términos temporales– a la crisis producida por la pandemia COVID-19. El hecho de que fuera posible encontrar configuraciones homólogas en cada una de las bases y que pudiesen identificarse estos perfiles en encuestas aplicadas en 2017, 2018 y 2020 (esta última, durante el primer año de pandemia) –sin contar con las articulaciones que encontramos entre los perfiles estadísticos

⁴ Este procesamiento fue realizado con la asistencia del Dr. Héctor O. Mansilla.

y las tipologías discursivas y de guiones políticos que hemos hallado en otras instancias metodológicas de nuestra investigación– habla de la fiabilidad de esta construcción analítica.

Percepción y evaluación subjetiva de las desigualdades

En la encuesta LB encontramos una tendencia sostenida en el tiempo a lo largo de todo el siglo XXI de evaluación crítica o negativa de la justicia distributiva en nuestro país. En todo el período, por lo menos el 75 % de los encuestados (y muy frecuentemente por encima del 90 %) juzga como injusta o muy injusta la distribución del ingreso en Argentina. En 2002 (plena crisis) la modalidad “muy injusta” llega a casi 64 % de los encuestados (su máximo registro) para descender entre 2011 y 2015 por debajo del 23 %. Este momento de evaluación relativamente positiva coincide con los últimos años de crecimiento y redistribución de los gobiernos posneoliberales de la región y de Argentina en particular.

Gráfico 1. Evaluación subjetiva de la justicia distributiva en Argentina. 1997-2020



Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro.

Otra cuestión por señalar es que, entre el cambio de gobierno a nivel nacional en 2015 (la victoria electoral y asunción de Cambiemos) y 2020, la evaluación de la distribución del ingreso en el país en términos de “muy injusta” aumentó a más del doble, aun cuando los indicadores distributivos no reflejaron semejante crecimiento de la desigualdad. Como hemos mostrado en otros trabajos (Assusa y Kessler, 2020a, 2021), antes que un mero reflejo de la realidad distributiva, estas opiniones deben pensarse a partir de una serie de mediaciones o puentes (posición social, preferencias políticas, estatus social subjetivo, etc.) (CEPAL, 2010), decodificaciones (grupo de referencia, sesgo cognitivo o perceptual, disponibilidad heurística), de la alta sensibilidad coyuntural de la población y en términos de manifestaciones que tienden a ser sintéticas o totales (malestar subjetivo, social o ciudadano) (CEPAL, 2021; PNUD, 2021).

Si más de 9 de cada 10 argentinos entiende que la distribución del ingreso es injusta o muy injusta en el país en 2020, un número similar (casi 9 de cada 10) entiende que es injusto o muy injusto el acceso a la justicia en el país, mientras que cerca de 6 de cada 10 entiende que es injusto o muy injusto el acceso a la educación y la salud. Esta diferencia importante hace pensar en la autonomía relativa de las evaluaciones subjetivas sobre la problemática distributiva o de acceso en cada esfera de bienestar. En este sentido podemos identificar a la esfera económica y la de justicia como las más problemáticas en las percepciones de la población.

Entre otras innovaciones, el cuestionario 2020 de LB incorporó preguntas sobre quiénes reciben menos y quiénes reciben más de lo que merecen por su esfuerzo: de alguna manera, víctimas injustas y privilegiados no meritorios del proceso distributivo (McCall, 2013). Entre las víctimas, los más mencionados son los trabajadores y las personas de la tercera edad (con más de 71 % de menciones). A continuación, aparecen también recibiendo menos de lo que debieran los pobres, las mujeres y los pueblos originarios (37 % a 46 % de menciones). Como veremos en próximos apartados, el lugar preponderante de los trabajadores –y, por extensión, del trabajo como valor– en

la construcción de legitimidad distributiva será uno de los ejes que atraviesan todo nuestro análisis.

En contraposición, quienes para los encuestados reciben más de lo que merecen por su esfuerzo son, en primer lugar, parlamentarios, jueces, funcionarios públicos y el presidente de la república, todos con menciones por encima del 66 %. Solo en segundo lugar aparecen los ricos y los empresarios (43 a 48 %). Como veremos también más adelante, el empleo público y el gasto público ocupan un lugar central en la configuración de posicionamientos políticos en torno a la igualdad y la justicia distributiva.

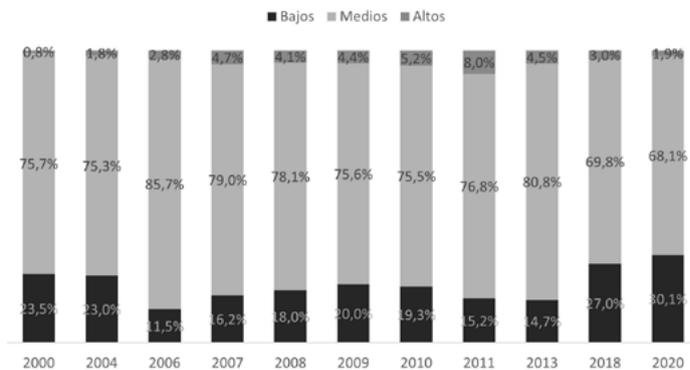
Al indagar sobre quiénes son considerados como los actores con más poder en el país, las mayores menciones fueron para las grandes empresas (39 %) y los sindicatos (30 %). En un punto, esto nos permite distinguir algunas cuestiones respecto de la pregunta previa. En primer lugar, que las grandes empresas sean identificadas como parte de la elite no quiere decir que su poder sea cuestionado en cuanto a su legitimidad (porque las grandes empresas no son las más mencionadas como privilegiados no meritarios). En segundo lugar, que, junto a los políticos, los sindicalistas son comúnmente incluidos en las representaciones de los encuestados como parte de los sectores “privilegiados” de nuestra sociedad.

Ahora bien, ¿desde dónde perciben la desigualdad los encuestados? ¿desde qué lugar juzgan la estructura distributiva? ¿desde su posición en la estructura social? ¿o desde el lugar de la escala social con el que se identifican? Las investigaciones del estatus social subjetivo proveen interesantes pistas al respecto. LB incluye en su cuestionario una *self anchoring scale* o escala subjetiva de pobreza-riqueza en la que se le solicita al encuestado que se ubique a sí mismo en una escala social del 1 al 10. Con movimientos distintos, los procesos históricos muestran dos características comunes. En primer lugar, una fuerte preminencia en el siglo XXI de identificaciones con los sectores medios. En segundo lugar, un impacto de los períodos de crisis en la autopercepción de los encuestados, generando un crecimiento en

el porcentaje de la población que se autopercibe en condiciones de pobreza.

El primer punto debe hacernos pensar en cuáles son las identidades (posicionales o de clase) desde las cuales se movilizan las evaluaciones subjetivas, pero también las demandas políticas en torno a la igualdad. En nuestro caso, lo que no deberíamos hacer es imaginar las demandas de redistribución puramente ancladas en los sectores más empobrecidos, sino fundamentalmente enarboladas por personas que se autoperciben pertenecientes a las clases medias (Grimson, 2015). El segundo punto resulta ilustrador sobre la sensibilidad relativa de los ciudadanos a los períodos de transformación o crisis, aun cuando estos no se reflejen tan plenamente en indicadores estadísticos objetivos.

Gráfico 2. Estatus social subjetivo. Argentina. 2000-2020



Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro.

Por otra parte, es importante no asumir –desde la posición de analistas o especialistas en la materia– qué significación y dimensión tienen para los encuestados las brechas que separan a una y otra posición: ¿cuán lejos están ricos y pobres en cuanto a ingresos económicos y riqueza en sus representaciones? Según los datos de LB, en promedio, los encuestados imaginan que la brecha entre el quintil

1 (el más bajo) y el quintil 5 (el más alto) de ingresos es de casi 19 veces. En contraposición, cuando se les pregunta por cómo desearían que fuese la estructura distributiva, esta distancia baja en promedio a menos de 2 veces. No en términos de falsación, sino de contextualización: según los datos de EPH-INDEC, para el tercer trimestre de 2020, la distancia de ingresos entre el quintil 1 y el 5 era de 10 veces.

En otras palabras: la opción por la igualdad (o al menos por una reducción de las brechas de desigualdad de ingresos), tanto como la sensibilidad para la percepción de brechas de desigualdad existentes, no solo son mayoritarias, sino también de una alta intensidad entre los encuestados.

Preferencias políticas redistributivas

Esto nos lleva a otra serie de preguntas: ¿quiénes son los sujetos imaginados como población objetivo de las políticas para reducir la desigualdad? ¿a quiénes deben alcanzar las ayudas gubernamentales en las representaciones de la población? ¿qué formato deben asumir estas ayudas? ¿con qué recursos deben sustentarse?

En materia de preferencias políticas redistributivas, LB incorporó preguntas sobre políticas sociales y sobre impuestos. En primera instancia, se les pregunta a los encuestados sobre los modos en los que el gobierno debería ayudar a los pobres. Darles trabajo es el formato más elegido (93 % de menciones), seguido por acceso a educación y salud (66 %) y servicios públicos (43 %). La recepción de ayuda en dinero, en contraposición, fue de las opciones menos elegidas (10 %), junto al acceso a servicios de transporte (0 %). Otras investigaciones han mostrado tendencias homólogas hace algunos años (Cruces y Tetaz, 2009). Nuevamente las esferas de bienestar y la centralidad de la moralidad del trabajo juegan un rol fundamental en la construcción de legitimidad en las disputas distributivas.

El 8 % de los encuestados considera que ningún hogar debería recibir ayudas del gobierno. Un 17 % considera que todos los hogares deberían recibirla por igual (es decir, que esta ayuda no afectaría en

nada la estructura distributiva). Finalmente, más de la mitad de los encuestados considera que deberían recibir ayuda del gobierno los hogares hasta el cuarto tramo de ingresos, es decir, que el 40 % más pobre debería tener acceso a estas ayudas (un modelo de políticas sociales focalizadas).

Otro punto a destacar es que el 75 % de los encuestados eligió que la garantía estatal de estos bienes y servicios fuese solo parcialmente subsidiada y no completamente gratuita. Como veremos en próximos apartados, la idea de incorporar aportes propios y cuotas mínimas de autonomía y esfuerzo para no generar dependencia constituyen elementos centrales para comprender las múltiples modulaciones de los posicionamientos frente a la desigualdad y frente a las políticas sociales, más allá de las posturas más globales a favor o en contra de las políticas redistributivas.

Observando al mismo tiempo la cara impositiva de la moneda, solo un 8 % de los encuestados considera que ningún hogar debería pagar impuestos. Un 12 % considera que todos los tramos de ingreso deberían pagar impuestos (nuevamente, sin atender a la estructura distributiva). La mitad, en cambio, considera que deberían pagar impuestos los hogares desde el tramo 8 (es decir, el 30 % más rico de la sociedad). De hecho, el 57 % considera que la estructura impositiva debe ser progresiva, es decir, que quienes más tienen, más deberían pagar.

¿Quiénes perciben más la desigualdad y apoyan con más intensidad políticas redistributivas?

Como antes mencionamos, la relación entre desigualdad realmente existente, percepción y evaluación de la desigualdad, y formulación de demandas políticas de igualdad, dista mucho de ser mecánica. De hecho, la bibliografía especializada en la cuestión tiende a remarcar los procesos de sesgo o disonancia cognitiva y de discordancia y conflicto perceptual (Grimson y Roig, 2011). A nivel de países, se habla de la “paradoja de Robin Hood” (Choi, 2019): en muchas naciones con

menores niveles de desigualdad existen mayores esfuerzos distributivos por parte de sus Estados. La pregunta por el caso contrario es la que se formula en el clásico texto de Hochschild (1981): ¿por qué no existe socialismo en un país (tan desigual) como EE. UU.?

La lógica sociológica indicaría que las posiciones subalternas en la estructura social y las personas con orientación política de izquierda tenderían a ser más críticas en su percepción y evaluación de la desigualdad, al mismo tiempo que apoyarían en mayor medida políticas redistributivas. Sin embargo, distintas investigaciones han sostenido afirmaciones opuestas al respecto.

Por otra parte, el mayor nivel educativo... ¿Implica un indicador de privilegio y jerarquía social? ¿O funciona como recurso simbólico y cognitivo para percibir críticamente la desigualdad efectivamente existente? ¿Y los ingresos económicos? ¿Implican condiciones de privilegio a conservar o liberación de necesidad y recursos para la reflexividad crítica? ¿Y la ideología? ¿Cómo opera en relación con el gobierno de turno? ¿Definirse de izquierda implica continuar con la intensidad crítica si el gobierno de turno es progresista o de izquierda?

Existen también otras relaciones posibles, menos exploradas. En primer lugar, si el sesgo cognitivo efectivamente existe, prestarles atención a las variables con indicadores de percepciones, evaluaciones y orientación política puede ser relevante, aunque siempre existen dudas sobre los análisis que explican actitudes por actitudes u opiniones con opiniones. Las preguntas que se formulan en esta clave, sin embargo, no son menores: ¿quiénes más perciben desigualdad la evalúan como más injusta? ¿en qué medida? ¿y apoyan políticas redistributivas? ¿de qué tipo?

En segundo lugar, si las personas con mayores recursos económicos y más identificados con la derecha tenderían a percibir menos la desigualdad y a considerarla en menor medida injusta, ¿qué sucede con las personas de bajos ingresos de derecha? ¿o de altos ingresos, de izquierda y con altos niveles educativos? Si bien existen muchas investigaciones que aplican regresiones y técnicas estadísticas

complejas para proponer explicaciones del carácter multivariado del fenómeno de la percepción de las desigualdades y las preferencias políticas redistributivas, la mayoría de las veces se centran en el efecto de las variables de manera conjunta y aislada, pero en mucha menor medida disponen de instrumentos para construir perfiles o tipologías de personas, votantes o ciudadanos, con perspectiva de dar continuidad a indagaciones con articulación de métodos y técnicas de corte cualitativo.

Con estos debates en el horizonte, para esta investigación emprendimos la construcción de clases o tipologías de personas que combinaran percepción de la desigualdad, evaluación subjetiva de la desigualdad y preferencias políticas redistributivas. Para ello aplicamos a las tres bases de datos (LB, WVS, BA) un análisis de correspondencias múltiple (ACM) combinado con técnicas de clasificación jerárquica ascendente (CJA), con la asistencia del software estadístico francés SPAD.

El ACM resulta de una combinatoria de técnicas que funcionan como herramientas para pensar estructuralmente las asociaciones estadísticas. No es una técnica de carácter demostrativo, explicativo o predictivo que sirva para “determinar causalidad” (en un sentido lineal), sino que, dentro del conjunto de técnicas multivariadas que analizan relaciones de interdependencia, forma parte de los análisis factoriales que permiten clasificar unidades de análisis y variables (Baranger, 2004; Mansilla, 2011). Es una técnica exploratoria, fundamentalmente utilizada para crear tipologías (López-Roldán, 1996), plantear hipótesis y construir interpretaciones, que solo podrán avanzar por medio de la complementariedad con otras técnicas (Baranger, 2004; Gutiérrez, Mansilla y Assusa, 2021).

La apuesta por un procesamiento de estas características está vinculada a la necesidad de pasar de explicar la influencia de cada variable (y su agregación) en las percepciones y las preferencias políticas en torno a la desigualdad y la redistribución, a comprender de forma compleja el efecto estructural y relacional del conjunto de variables en la conformación de agrupamientos políticos y perceptuales. Cada

Podemos identificar un primer perfil pro-Estado (36 %),⁵ caracterizado por una percepción claramente crítica de la desigualdad, definida como inaceptable y muy injusta. Su definición de la desigualdad se concentra en los ingresos, pero también se extiende a otras esferas de bienestar, como la justicia, la educación o la ciudadanía. Los sujetos víctimas del proceso distributivo (quienes reciben menos de lo que debieran por su esfuerzo) para este perfil serían fundamentalmente los trabajadores y los pueblos originarios.

También se caracterizan por preferencias distributivas marcadas: amplia cobertura de ayudas sociales estatales y políticas fiscales progresivas, gravando fundamentalmente a quienes más recursos tienen. Las formas de ayuda estatal más elegidas para los pobres en esta tipología son dar trabajo y dar servicio de internet (recordemos que el cuestionario se aplicó en pleno 2020, signado por la pandemia, la cuarentena y las políticas de “continuidad pedagógica”).

A continuación, aparece un segundo perfil –pro-Mercado (23 %)⁶ que se caracteriza, en primer lugar, por preferencias impositivas regresivas y por una política de ayudas estatales no redistributiva, es decir, una concepción de política social “para todos” o “para nadie”.

⁵ Como mencionamos, identificamos un perfil homólogo en la WVS de 2017 con un peso del 25 % de la muestra, más caracterizado por la adhesión a la demanda de mayor igualdad de ingresos, por una orientación ideológica a la izquierda y por el voto al kirchnerismo (en términos muy amplios, la principal coalición partidaria progresista), además de por la asociación con estatus social subjetivo bajo. Algo similar sucedió con BA de 2018, en la que construimos un perfil homólogo con un peso del 37 % de la muestra, con características similares, a las que se suma la postura crítica frente a las imputaciones casuales individualistas de problemáticas como el desempleo.

⁶ También identificamos un perfil homólogo en la WVS de 2017 con un peso del 30 % de la muestra, más caracterizado por la adhesión a la iniciativa privada, a la moralidad del esfuerzo y por una asociación con estatus social subjetivo alto y con el voto a Juntos por el Cambio (en términos muy amplios, la principal coalición partidaria de centroderecha). Este perfil no aparece caracterizado por una valoración de la desigualdad como motor o incentivo individual (en sintonía con lo que sostuvimos como análisis para la base de LB). Algo similar sucedió con BA de 2018, en la que construimos un perfil homólogo con un peso del 36 % de la muestra, con características similares, a las que se suma la asociación al nivel educativo alto, opiniones de corte antipolítico, adhesión a posturas conservadoras en la agenda moral, identificación política de derecha y voto por Juntos por el Cambio.

Sin embargo, esto no hace que su evaluación de la distribución del ingreso en el país sea menos crítica: coinciden con el perfil previo en su asociación estadística a evaluaciones de la distribución como “muy injusta” y a la calificación de “inaceptable” respecto del nivel de desigualdad existente en el país. También reconocen críticamente el acceso a otros derechos o esferas de bienestar, como la justicia, la salud o la educación.

Su identificación de sujetos privilegiados en dicha injusticia distributiva se concentra en el presidente, los parlamentarios y los funcionarios públicos, e identifica a los sindicatos como el agente que más poder tiene en el país, seguido por el gobierno y los partidos políticos. Junto a la reprobación de la gestión del presidente Alberto Fernández, parece un grupo caracterizado por una postura crítica del Estado y del sector público como agente de intervención social. A diferencia del perfil anterior, presenta algunas asociaciones a posiciones de clase media baja, tanto a nivel identitario como por su evaluación del presupuesto familiar (“les alcanza justo”).

Al tercer perfil lo denominamos Condicionales (40 %).⁷ Se caracteriza, en primer lugar, por una percepción más moderada o intermedia de la desigualdad y por una evaluación también intermedia de la justicia distributiva en el país. Define esta tipología una suerte de postura intermedia en cuanto a preferencias distributivas: ayudas estatales de alcance más focalizado (para los cuatro primeros deciles de ingreso) y la elección de una estructura fiscal que atiende a la desigualdad, pero no tan concentrada en los sectores de mayores recursos (para este perfil debería pagar impuestos el 50 % mejor posicionado de la escala social). Esta tipología aparece asociada a un

⁷ Identificamos también tipologías homólogas en WVS (45 % de la muestra) y BA (27 % de la muestra), aunque los cuestionarios de estas encuestas resultaron mucho menos productivos para caracterizar este agrupamiento. Es un desafío a futuro darle continuidad a la producción de datos como la de esta investigación, que se diseña pensando en un conocimiento profundo también de estos sectores estratégicos en las disputas distributivas.

nivel bajo de ingresos económicos y a la aprobación de la gestión del presidente Alberto Fernández.

La relevancia de este tipo de procesamiento en distintas fuentes de datos es el hallazgo de algunas configuraciones comunes, hipotéticamente fundadas en la estructura multidimensional misma de los datos. En este sentido, las principales oposiciones entre los agrupamientos o polos no están dadas por la preocupación y la percepción de una estructura distributiva injusta en la economía de nuestro país. De hecho, ese punto juega casi como un pivote o punto de articulación entre los polos.

Antes bien, las diferencias se traman en torno a universos de ideas más amplios sobre el lugar del Estado en la regulación de la economía, en la moralidad y la eficacia de sus intervenciones, y en la preferencia por unos mecanismos de extracción de recursos públicos de la sociedad civil y de distribución de esos recursos en determinados sectores con el formato de ayudas sociales desde el Estado. Comprender esto puede llevarnos, no solo a conocer más en profundidad los principios de justicia que sostienen los relatos y discursos en pugna en la disputa distributiva, sino también a repensar nuestras estrategias y nuestras alianzas en áreas específicas.

Guiones políticos en medios y redes

En esta sección nos enfocamos en la forma en que se trataron los tópicos distributivos en la pandemia en general y, en particular, en el tratamiento del IFE y del Impuesto a las Grandes Fortunas en los medios y las redes, así como en el interés del público por las noticias de cada tema. En primer lugar, realizamos un estudio de agenda y *framing* sobre los medios digitales, indagando en los temas que más espacio ocuparon en los portales de noticias, así como su tratamiento. Luego nos acercamos a la recepción de las noticias mediante una herramienta que nos permite detectar las notas más compartidas en Facebook. Por último, nos focalizamos en las discusiones en Twitter,

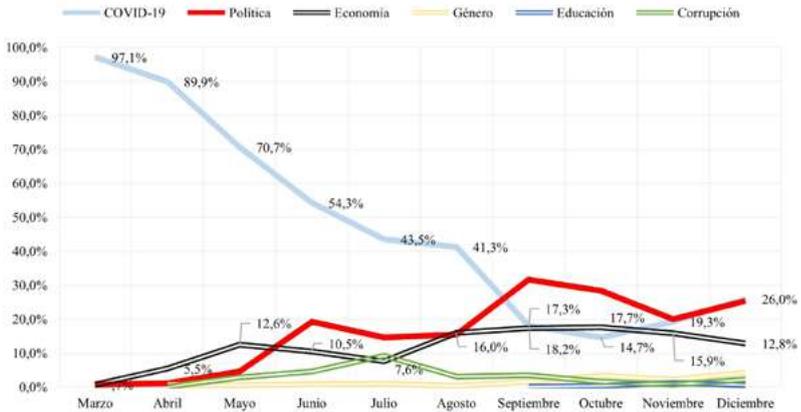
en la medida que representan los segmentos más politizados de la sociedad. Si bien no alcanzan a constituir una muestra representativa de la intensidad del interés por los temas en la sociedad en general, sí son un buen indicador de los polos discursivos y controversias que están circulando.

¿Qué temas ocuparon la agenda mediática en la pandemia?

Los resultados de este apartado provienen del Observatorio de Medios Digitales que dirige Esteban Zunino, quien nos proporcionó la información. Este Observatorio registra y analiza las noticias de los principales diarios del país, en este caso: *Clarín*, *La Nación*, *Infobae* y *Página/12* desde el 20 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Luego se identificaron las noticias explícitamente relacionadas con la pandemia (n = 4980), las cuales fueron codificadas y constituyen las unidades de análisis de este apartado.

Los hallazgos principales coinciden con los que se señalan en Zunino (2021) para un período más corto, del primer semestre de 2020. En primer lugar, se determina la relevancia de la cobertura de la COVID-19 en los principales medios digitales de la Argentina, como se muestra en el Gráfico 4. Como en crisis sanitarias anteriores, se constató en diferentes países un incremento de la demanda de información (Casero-Ripollés, 2020; Duc Huynh, 2020). La presencia de las noticias de COVID-19 durante el año 2020 tuvo una relación inversa con la evolución de la pandemia, es decir, tuvo picos en los meses iniciales cuando había menor número de casos y, a mediados de año, cuando los casos de contagio comenzaron a incrementarse en todo el país, la frecuencia de las noticias del tema comenzó a disminuir en forma paulatina.

Gráfico 4. Evolución de temas en los medios en 2020



Fuente: elaborado por Esteban Zunino.

¿Por qué la frecuencia del tema disminuye cuando aumentan los casos? Frente a esto podemos formular dos hipótesis complementarias. La primera tiene que ver con el ciclo de noticiabilidad de toda temática: su frecuencia tiende estabilizarse en la agenda de medios cuando dura mucho tiempo, bajo el supuesto del creciente desinterés de los públicos por algo que ya no es novedad. En este caso se trata de una posible saturación durante los meses previos y la falta de novedades que puedan relanzar el tema (como sucedió luego con novedades como el “Vacunatorio VIP”, los vaivenes de las campañas de vacunación, etc., que le dieron renovada centralidad a la cuestión).

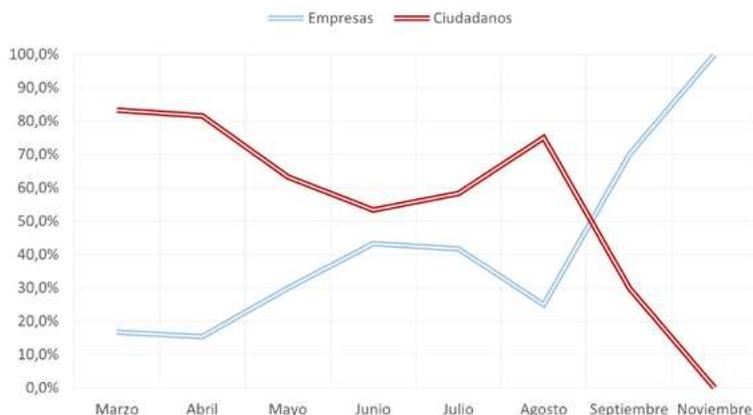
A esto se sumaría la habitual sobrerrepresentación de las noticias en lo que sucede en el AMBA. En efecto, hubo un desfase en los ritmos de la pandemia entre esta región y las restantes provincias del país. La pandemia comienza en la zona metropolitana y recién hacia mediados de año, cuando empezaba allí a estabilizarse, los casos aumentaron en gran parte de las provincias del país. La agenda de medios, entonces, ya “fatigada” del tema, no logra ser reactivada por el aumento de casos en las provincias: dicho de otro modo, la creciente gravedad de la situación en las provincias no logró casi contrarrestar

el factor “área metropolitana” de los medios. No sucedió, claro está, lo mismo con los medios regionales, que sí seguían el curso de la pandemia en sus lugares, como se muestra en Zunino (2021).

¿Cuáles son los otros temas con primacía? Como es habitual, política y economía. Política tiene picos en distintos meses, siguiendo algunos eventos significativos (el intento de expropiación de la empresa Vicentín, en primer lugar, y discusiones con la oposición, luego) y economía tiene un pico en agosto y luego se mantiene bastante estable. En efecto, se observa hacia mitad de año un interés creciente por la economía, a medida que la situación se vuelve cada vez más compleja. Los temas de la agenda de economía son variados y reflejan las distintas novedades y las medidas. A modo de recorrido por la situación: en marzo los temas son congelamiento de las tarifas de servicios y de los alquileres, la implementación del IFE; en abril el cobro de otro pago del IFE, los créditos a tasa cero para monotributistas y otros beneficiarios; en mayo la caída de la actividad comercial; en junio y julio el cierre de empresas, la salida del país de varias firmas, la implementación de la ATP; en septiembre las paritarias del año y en noviembre y diciembre los debates e implementación del Impuesto a las Grandes Fortunas.

Quizás el punto más importante es el siguiente: los agentes o sujetos de los temas de preocupación son en un primer momento las personas (particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad) y luego los agentes económicos (empresas) afectados por la caída de la actividad económica por la crisis COVID-19 y el confinamiento, como muestra el Gráfico 5.

Gráfico 5. Víctima principal de la pandemia en las noticias



Fuente: elaborado por Esteban Zunino.

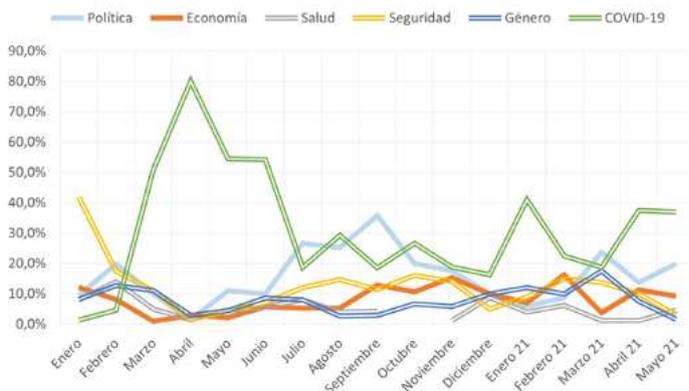
Estos datos muestran cómo hay un pasaje en las noticias en que las víctimas son en un primer tiempo las personas y, a partir de mayo-junio, se pone más foco en las empresas. En línea con este hallazgo, también hay un desplazamiento de las clases preponderantes de las víctimas. En un primer tiempo serían pertenecientes a las clases bajas y luego, sobre todo a partir de mayo, comienzan a repartirse en su mayoría entre clases medias y clases altas. Presumiblemente, el pasaje del foco en la situación de necesidad de los sectores bajos a una preocupación creciente por las consecuencias de la caída de la actividad en los agentes económicos sea la explicación de este cambio. Al fin de cuentas, en un primer momento la preocupación se focaliza en la necesidad de dotar de ingresos a quienes estaban desprovisto de los mismos, implementándose medidas como el IFE, y a medida que el confinamiento se extendía, la preocupación por los agentes económicos redirige la mirada hacia los sectores medios y altos, en su calidad de propietarios, empleadores o profesionales. Finalmente, en la evaluación de la gestión económica de la pandemia, hay una valoración positiva al principio, pero esta enseguida cae y las evaluaciones negativas no se recuperan nunca.

¿Qué noticias interesaron más al público?

La herramienta CrowdTangle nos permite indagar en el interés de los públicos en 2020. La investigación consiste en un análisis de los contenidos informativos que mayor nivel de involucramiento alcanzaron (*likes, comments y shares*) en Facebook entre enero de 2020 y junio de 2021. La elección de Facebook para esta investigación se sustenta en que es la red social más consumida, con 2.500 millones de usuarias y usuarios, lo que representa un 64 % de penetración, que aumenta al 82 % en la Argentina, con un nivel de utilización del 65 % para el consumo de noticias (Newman et al., 2020). Los posteos fueron recopilados diariamente por la herramienta CrowdTangle, una plataforma que permite acceder a un monitor digital de posteos relevantes generados a través de páginas públicas de perfiles verificados, personalidades, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros. Concretamente, se efectuó un análisis de contenido cuantitativo (Colle, 2011; Krippendorff, 1990) sobre una muestra aleatoria del corpus. Con esta información, investigamos la fisonomía de la agenda informativa construida por las audiencias digitales en el contexto de pandemia, el nivel de concentración y/o fragmentación de los consumos y los encuadres predominantes en la información.

¿Cuáles son los temas que más interés causaron? ¿Continúa el interés del público la misma evolución que la agenda de los medios? La respuesta es: no. El hallazgo principal es que el interés por el COVID-19 se mantiene en todo el período y es el tópico más compartido. Así, respecto de las hipótesis sobre el cansancio del público, no sabemos si los medios adoptaron esta idea, aunque quizás este interés continuo pudo haber estado traccionado en la segunda mitad del año por usuarios y usuarias de provincias del interior, a medida que la pandemia se intensificaba en sus lugares.

Gráfico 6. Evolución de las noticias más compartidos en Facebook



Fuente: elaborado por Esteban Zunino en base a Crowd Tangle.

Cabe subrayar que nuestra herramienta no puede distinguir la localización de los usuarios. Veamos ahora un panorama de lo sucedido a lo largo del 2020 hasta mayo de 2021. Observamos el pasaje de una concentración en tópicos de seguridad en enero de 2020 (traccionado por el asesinato del joven Fernando Báez por un grupo de *rugbiers* en la ciudad balnearia de Villa Gesell que causó una conmoción nacional)⁸ y ya en febrero el COVID-19 se instala como tema principal. De marzo a junio ronda en el 50 % de las noticias más compartidas, luego desciende y se ubica entre un 20 % y un 30 %, para alcanzar un nuevo pico en enero de 2021, a partir del escándalo del “Vacunatorio VIP”, y luego vuelve a ubicarse entre el 20 % y 30 % de lo más compartido.

¿Cuál es el segundo tópico de mayor interés? En algunos meses es la política, en otros es la inseguridad. Las noticias económicas tienen baja presencia hasta septiembre y luego comienzan a subir. Es interesante que las noticias de género tienen siempre una presencia

⁸ Ver las noticias del caso en <https://www.telam.com.ar/tags/21687-fernando-baez-sosa/noticias>

significativa, como el tercer, cuarto o quinto tema, si bien cuando analizamos la agenda mediática, no es en este período una temática muy frecuente. Hemos categorizado a las noticias económicas en aquellas vinculadas al COVID-19 (por ejemplo: IFE, ATP, Impuesto a las Grandes Fortunas) y las no vinculadas directamente a la pandemia (negociación de la deuda externa, inflación, etc.). Vemos que la agenda económica “no COVID-19” es la más frecuente de marzo a junio de 2020. Los agentes o atribución de responsabilidad sobre este tema se concentran en empresas privadas y públicas, los miembros del Poder Ejecutivo Nacional y el presidente. En general, cuando hay atribución de responsabilidades, las noticias son negativas.

¿Qué pasa con el debate en Twitter?

El Impuesto a las Grandes Fortunas fue uno de los temas que más debate generó en la pandemia, tanto en las redes como entre nuestros entrevistados. Por ello es interesante detenerse en el debate en Twitter para captar posiciones distintas y controversias. Hicimos un análisis de los tweets que mencionan este tema durante dos meses.⁹ Hubo 265.487 tweets. Para establecer un parámetro comparativo: las menciones a Alberto Fernández en la semana del 9 al 15 de mayo de 2020 fueron 363.000, un 36 % más que las menciones del impuesto y en una sola semana en vez de dos meses. Sin embargo, es un número importante: hablaron del tema 76.159 usuarios, la cantidad de retweets fue de 221.155, lo cual es una proporción de retweets de 0.8330163058831506, considerada por la métrica como importante e indicador de la relevancia del tema.

⁹ Juan Manuel Ortiz de Zárate y Federico Albanese realizaron este tratamiento informático.

@88lamaga). Esto quizás sea un indicador de que ninguna figura de la oposición quiso ubicarse como el “defensor de los ricos”, a pesar de que la casi totalidad del bloque opositor votó en contra del impuesto.

Veamos ahora la argumentación general de cada grupo. Los ejes de la argumentación del *oficialismo* son los siguientes: en primer lugar, se trataría de un impuesto extraordinario por una situación única, los pagarían solamente los millonarios y se utilizaría para fines concretos de ayuda social y de mejora en términos de integración urbana. Para ello se traen a colación ejemplos de impuestos similares en países europeos, como Dinamarca. Se critica a la oposición y se afirma que se oponen porque defienden a los ricos, al mismo tiempo que se asegura que no afectará ni la inversión ni el consumo (uno de los argumentos de los críticos al impuesto). También se citan las declaraciones de algunos miembros de la elite económica, empresarios sobre todo que apoyan el impuesto, tanto en el país como algunos ricos a nivel global. Por último, se señala que la oposición debiese votar a favor de la medida para restaurar algo de lo que los sectores populares han perdido en la pandemia y antes, durante el gobierno de Mauricio Macri: cuando dicha gestión bajó el impuesto a los más ricos se perdió inversión en el país en lugar de haberse utilizado ese dinero para aumentarla.

Los ejes de la *oposición* en gran medida están concentrados en el diario *Clarín*, un *troll* que usa la denominación Cristian Millo y otros *trolls* o cuentas cuya identidad no es verificada, en su mayoría. ¿Cuáles son sus argumentos? Por un lado, se afirma que la medida tiene errores técnicos y que no hay ejemplos de que estos impuestos hayan tenido éxito en cuanto al dinero que se recauda. Sin embargo, las críticas se dirigen sobre todo a la deslegitimación política: calculan cuánto pagaría Máximo Kirchner, otros señalan que primero el kirchnerismo debería devolver lo robado y los bienes que tienen ocultos. Asimismo, se recogen voces críticas de asociaciones empresarias, en particular de la UIA, y tratan de mostrar desavenencias internas en la coalición oficialista, por ejemplo, señalando que la Casa Rosada

presiona a los gobernadores para que apoyen el proyecto cuando los líderes provinciales no estarían muy de acuerdo.

Por último, un tercer grupo de *tributaristas* se centra en los problemas técnicos y de implementación, así como en el señalamiento de que es un impuesto en parte “confiscatorio”. De algún modo es la visión “experta” del campo contrario al impuesto. Argumentan que es distorsivo y que será casi insignificante en términos de recaudación. Se arrojan el saber sobre el tema y piden debatir con políticos que apoyan al impuesto, a quienes consideran “ignorantes”. Hay, al mismo tiempo, un apoyo opositor, pero también un aspecto de autopromoción central de sus estudios impositivos, posiblemente para que los que deban pagar esos impuestos acudan a ellos, o para tener presencia en los medios y el espacio público en general.

¿Qué conclusiones podemos extraer? En primer lugar, el oficialismo presenta una argumentación bastante articulada de defensa del proyecto, señalando una población –“los ricos”– que no serían defendidos por nadie, menos aún por tratarse de un impuesto (en principio) extraordinario en tiempos de crisis profunda. También se encargó de desmontar algunas críticas, sobre su presunto impacto negativo en la inversión y consumo, al tiempo que señaló voces de la elite apoyándolo y ejemplos de países que habían establecido medidas similares. Por lo visto, la oposición no quiso transformarse en “defensores de los ricos” y ese rol quedó para algunos *trolls* y medios como *Clarín*, que se centraron sobre todo en la ilegitimidad del gobierno, en particular de Máximo Kirchner, para proponer este impuesto, siendo él rico y con una fortuna de “dudoso” origen. Los tributaristas, por su parte, en una combinación entre autopromoción y convicciones, se colocaron como los propietarios del saber y conocedores de las fallas técnicas de la medida, siendo críticos acérrimos al proyecto.

Discursos y posicionamientos políticos distributivos

En esta sección analizamos las prácticas discursivas de legitimación, justificación e impugnación en cuestiones distributivas entre agentes representativos de distintas posiciones sociales. Construimos una muestra tomando en cuenta cuotas de edad, sexo, posición económica, ubicación geográfica y preferencias partidarias.

A partir del análisis cualitativo de 52 entrevistas en profundidad organizamos nuestro material en tres grandes tipologías, homólogas en su construcción a los perfiles definidos en secciones anteriores: pro-Estado (35 % de la muestra), pro-Mercado (15 % de la muestra) y Condicionales (50 % de la muestra). Cada uno de estos sectores es abordado en relación con una serie de dimensiones: percepción y evaluación de las desigualdades, posicionamiento frente al funcionamiento del estado y sobre las políticas sociales o ayudas estatales, preferencias impositivas y representación de las elites.

Como sucede también en el análisis de corte cuantitativo, cada uno de estos perfiles es relativamente heterogéneo a su interior, fundamentalmente en términos socioeconómicos y demográficos. Esto no quita que podamos identificar elementos recurrentes de peso, tendencias dominantes que contribuyen a conectar entre las dimensiones de nuestra investigación y a plantear explicaciones complejas. Por una cuestión de espacio, en general nos concentraremos en las características fundamentales que más diferencian a los entrevistados entre tipologías y dejaremos para futuras publicaciones el análisis más detenido de diferencias internas de segundo orden. Una salvedad para esto, sin embargo, es la caracterización del perfil de Condicionales, que será analizado más en detalle dada su magnitud y su carácter de relativa vacancia en investigaciones anteriores.

Discurso pro-Estado

Los relatos de este perfil tienden a una percepción intensa de la desigualdad social en nuestro país, con un acento crítico hacia las narrativas meritocráticas y del *emprendedurismo*: “uno puede, pero millones no”. Las explicaciones de la desigualdad en este paradigma político están centradas en causas de orden contextual y en condicionamientos sociales, fundamentalmente ligados al origen social de las personas para acceder a derechos laborales, educativos, a la salud, entre otros.

Pienso que es un país desigual, pensándolo como desigualdad igual dificultad. Siento que es un país dificultoso, tal vez para algunas personas y para ciertas trayectorias. No lo pienso así si has nacido en una casa de clase media, o sea, claramente tenés dificultades, pero no siento que sean dificultades que te generan un mal en la vida (estudiante, 21 años, AMBA).

Estos emprendedores de los que tanto se habla, de la meritocracia que tanto se habla, no existe porque no hay nadie que pueda llegar a ser por mérito propio, llegar a un lugar tan alto, siempre es porque viene con una ayuda enorme que los que están abajo no tienen. Si bien siempre hay alguno que sale y se destaca y entonces lo ponen como ejemplo de que ese uno pudo, pero los millones que no, no aparecen nunca en la tele, que uno salga es muy destacable, pero no, el esfuerzo personal no te salva tanto si vos no tenés una base de la cual salir [...]. Y eso es injusto y súper cruel, porque esos chicos son los que el día de mañana no van a tener ninguna, ninguna oportunidad y además van a ser estigmatizados, como que son vagos, que no quieren trabajar, que viven de planes y es muy injusto (profesor de nivel medio, 46 años, AMBA).

En este grupo, particularmente, existe una fuerte tematización de las desigualdades de género en distintas dimensiones: el reparto desigual de las tareas de cuidado, la superposición de tareas e incluso la subvaloración de estas actividades en un sentido laboral, además de

la desigualdad de poder y decisión en espacios de trabajo y la brecha salarial por género.

Para este perfil, el Estado aparece como el agente clave para la intervención en las estructuras de desigualdad y para los procesos redistributivos. En este marco, las políticas sociales aparecen como la herramienta fundamental de reducción de las desigualdades –con particular centro en la legitimidad de una política como la AUH–, constituidas en derecho de los ciudadanos y desancladas en general de elementos de condicionalidad como las contraprestaciones laborales.¹⁰ Este elemento es central porque constituye uno de los principales núcleos de diferenciación con otros perfiles.

En este marco, el IFE es evaluado como una medida necesaria y positiva, aunque es criticado tanto por los problemas administrativos para gestionarlo, como por la insuficiencia monetaria de la prestación. De hecho, en relación con la ATP (dirigida a trabajadores registrados), el IFE se valora por su orientación a necesidades más postergadas y urgentes: el IFE se concentra en la cuestión social, mientras que la ATP se orienta a las empresas y la economía. Como adelantamos en páginas anteriores, la ausencia de una agenda productivo-económica en el discurso de este perfil se constituye en un déficit fundamental para la construcción de consensos integrales sobre la cuestión distributiva.

En consonancia con esta ausencia y con la centralidad del Estado como agente de la distribución, este perfil se posiciona críticamente frente a la estructura regresiva de la política fiscal en el país. Las elites aparecen evaluadas en términos exclusivamente negativos: ellos son “saqueadores”, los “ricos” que evaden, mientras la clase media (en primera persona del plural) es la que paga. En este sentido, una medida como el Impuesto a las Grandes Fortunas tuvo fuerte

¹⁰ Se llama contraprestaciones laborales a las actividades que los beneficiarios de políticas sociales estarían “obligados” a realizar, como una suerte de devolución o mérito por la recepción de la prestación monetaria. Estas actividades son centrales en el llamado paradigma de las políticas activas de empleo y es altamente valorado por muchos de los entrevistados pertenecientes a los perfiles pro-Mercado y condicionales.

aprobación en este grupo, de la mano de la creencia en la necesidad del uso coactivo de la fuerza estatal.

Sin embargo, una de las principales herramientas de fiscalidad progresiva en nuestro país, como el Impuesto a las Ganancias, es resistida y criticada por los entrevistados de este perfil, por entender que grava los salarios y no necesariamente los más altos.

Si bien la caracterización de la elite de poder para este grupo está representada fundamentalmente por los grupos económicos concentrados (el círculo rojo, el campo y el agronegocio) y el sector financiero, también existen referencias de desconfianza respecto de la elite política, sobre todo la que tiene conexiones con esos grupos económicos, y de las negociaciones de estas elites en el poder “a espaldas del pueblo”. La referencia a la gestión de gobierno de Cambiemos, en estas menciones, resulta ineludible para este perfil.

En términos generales, las nuevas medidas redistributivas en el contexto de pandemia fueron apoyadas por los entrevistados de este perfil, pero al mismo tiempo fueron procesadas en los términos de su propia matriz político-cognitiva: el Estado es el agente clave de la redistribución, los impuestos deben volverse más progresivos y gravar coactivamente a las elites, no así a los salarios. La evaluación de la crisis COVID-19 en estos relatos reafirma la hipótesis de la ausencia de una agenda productiva fuerte para la distribución económica, y la prioridad de la agenda social por sobre la económica quedó plasmada en la frase “más IFE, menos ATP”.

Discurso pro-mercado

Los relatos de este perfil tienden a una tematización diferente de la cuestión de la desigualdad, aunque no de menor intensidad. Sus preocupaciones se centran sobre todo en el problema de la pobreza en un sentido más sustancial y autoexplicativo, sin demasiada referencia relacional al modo en el que se acumula riqueza o a las dinámicas distributivas en sí mismas.

Por otra parte, el diagnóstico más recurrentemente movilizado desde estos perfiles es el de la explicación cultural o moral de la pobreza, con un acento puesto en la responsabilidad y la voluntad individual. Sin embargo, esto no nos debería llevar a pensar en discursos estrictamente individualistas, al modo de “los pobres son pobres porque quieren”. Antes bien, la situación de pobreza se narra en estos relatos como resultado de un déficit de educación “desde chicos” en la familia y de una influencia desmoralizante de la asistencia estatal como un factor de dependencia y de desestructuración de la moralidad del esfuerzo y la “cultura del trabajo”.

Pero te vuelvo a decir, yo vengo de ser burra de laburo, ¿entendés? Porque yo lo viví con mis viejos, a mí me enseñaron que nada es gratis, que todo es un esfuerzo. Hasta que eso no se cambie, hasta que no les enseñen desde chicos que las cosas se tienen que ganar, se tienen que alcanzar y que tiene que haber un esfuerzo y un compromiso, no lo van a hacer y seguís formando esclavos (profesora nivel medio, 53 años, AMBA).

Pero siempre así, cuando aconsejo a mis hijos no es: anda a buscar un plan y salí de ahí, buscate un plan, no, eso no, ¿me entendés? Ese es el pensamiento de uno, ¿viste? Cuando estás en contra de algo, ¿viste?, cuando estás en contra de algo, en el sentido de que te duele tanto de que dan dinero a malas madres, a los hijos bueno, pero yo veo y he escuchado pensamientos de decir: ‘y tené otro chico más, ¿para qué vas a trabajar?, si tenés otro chico más y el Estado te va a pagar por esos tres chicos’ ¡y qué sueldazo tenés por tener los tres chicos!, ¿me entendés? (ama de casa y cadete, 49 años, Córdoba).

En línea con este diagnóstico, existe bastante recelo en este agrupamiento en torno a las acciones del Estado, particularmente las referidas al “gasto social”: “tanta ayuda crea ese sistema, ese entramado de asistencialismo que es totalmente nocivo”. Desde esta perspectiva, el dinero de los impuestos se “despilfarra” sin generar empleo privado “genuino” (este último, considerado la solución “de fondo” para el problema de la pobreza). El carácter injusto de la distribución no se

acota al ámbito de los “planes sociales” (que otorgan dinero a personas que no solo no trabajan, sino que carecen de los valores mínimos para esforzarse y vivir dignamente), sino que se extiende a todo el ámbito público, con una mirada tendiente a la antipolítica: los empleados públicos, además de comportarse como “ñoquis”,¹¹ acceden (sin mérito) a sus puestos por contactos, nepotismo, vínculos familiares, políticos y “amiguismo”.

En conjunto, esta mirada se combina con una alta preocupación por la problemática de la corrupción en el Estado, un emergente que funciona como un mediador estratégico para comprender las modulaciones en los posicionamientos políticos distributivos. La sensación de injusticia y el sentimiento de enojo que emergen al hablar de estos temas definen una asociación entre la imagen de los políticos y la idea de elite y casta,¹² tan presentes en el debate electoral de 2021.

Si bien la mayoría de las personas en este perfil juzgan como nocivas las políticas de transferencia de ingresos, la pandemia generó una suerte de paréntesis de relativización para este juicio: si las miradas más contemplativas valoraron el IFE como una medida necesaria en un contexto de crisis, las perspectivas más críticas en esta tipología consideraron que formaba parte de las soluciones incompletas, de los problemas generales de gestión y las complicaciones administrativas, “más de lo mismo” o “parches” que no resuelven el problema de fondo ni acompañan la aceleración de la dinámica inflacionaria: “una curita para una puñalada”.

Igualmente, en términos comparativos, el IFE parece percibirse de manera menos negativa que la AUH, fundamentalmente porque esta última se define en las representaciones de los entrevistados como una asignación de dinero consolidada en el tiempo, sin

¹¹ Esta expresión suele utilizarse para hablar de empleados “vagos”, que solo cobran su salario (los últimos días del mes) pero no trabajan realmente. El nombre proviene de una comida típica italiana que se acostumbra a comer los 29 de cada mes (fecha en la que también se suele cobrar el salario entre los empleados públicos).

¹² Javier Milei, candidato ultraliberal en las elecciones legislativas de 2021 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, popularizó la noción de “casta” para hablar en términos genéricos de las y los políticos como profesión.

contraprestación y por fuera de una situación crítica como la pandemia. Cuando los relatos asociaban ambas políticas, algunas personas manifestaban quejas de la tendencia del Estado a “dar más a los que ya recibían” y a quienes “no lo necesitaban realmente”.

En espejo con lo que mostramos en relación con la ATP en el perfil pro-Estado, esta medida encontró mayor aprobación en este agrupamiento de entrevistados, por orientarse al sector productivo, la “víctima” (subjektivamente) más importante por el detenimiento de la economía durante 2020, sin por esto estar exenta de las mismas críticas que el IFE: mala gestión y administración, problemas burocráticos e insuficiencia de las intervenciones.

Esta visión global sobre el Estado, lo público y “los políticos” converge con una perspectiva tributaria que sintetiza en la idea de “sentirse un boludo”,¹³ es decir, la sensación de formar parte del “50 %” de la sociedad que trabaja, paga impuestos, cumple y mantiene a la otra mitad. Esa mitad “productiva” es, justamente, la “castigada” por lo que estos entrevistados llaman impuestos “regresivos” (reversionando o revirtiendo el sentido técnico-tributario del término): los impuestos serían regresivos porque castigan a los que “quieren crecer” e “ir para arriba”. En este punto es relevante cómo el acento se pone en la dinámica, la pretensión y la voluntad (querer ir) de crecimiento económico, y no tanto en las posiciones consolidadas (estar arriba).

Este argumento sirve tanto para criticar a los que “trabajan en negro”, que serían los verdaderos beneficiados del tipo de política fiscal que se aplica en el país, como para defender a sectores específicos como “el campo” y su aporte de divisas al país a través de la exportación de la “santa soja”.

Y a diferencia de lo que sucedía con la relativización de la evaluación de las políticas sociales en el contexto de pandemia, el

¹³ Expresión coloquial para referirse a quien hace o dice tonterías, se comporta como un estúpido o no es responsable. En este caso se utiliza para hablar de sí mismos como excesivamente normativos (una semántica inversa), cumplidores de obligaciones en un contexto anárquico de evasión e infracciones generalizadas.

posicionamiento respecto al Impuesto a las Grandes Fortunas sostiene la línea crítica: el Estado no debería penar a los sectores más dinámicos (que, para colmo, ya pagaban impuestos “desde antes”), porque necesita que inviertan y generen riqueza y empleo, algo que este tipo de políticas desincentivaría. En este sentido, aparece otra línea de diferenciación con respecto al agrupamiento anterior: para estos entrevistados, este tipo de medidas no deben encararse desde la *coacción*, sino desde la voluntad de *consenso* del Estado. Como ya planteamos previamente, a todas estas reservas se suma la desconfianza sobre el “mal uso” de los recursos en el gasto público.

Me parece que castigar al que tiene el mérito de salir a laburar y romperse el traste con un impuesto así, me parece un robo. Cuando vos tenés otras esferas en que se aumentan los sueldos y no van a laburar porque son de acá, de allá. No me parece (profesora nivel medio, 53 años, AMBA).

Es importante señalar que, de igual modo que aparecen matices en la representación de las elites en el perfil previo, entre los entrevistados clasificados como pro-Mercado existen también empresarios valorados negativamente, justamente por no ser parte del sector productivo y dinamizador de la economía, y por hacer riqueza “a costa del Estado”. En este punto, de hecho, aparecen mencionados empresarios ligados al kirchnerismo. De la misma forma, el sector financiero genera ciertas dudas en estos discursos, pues no genera empleo ni toma riesgos. Esto diferencia fundamentalmente al sector financiero del “campo” en este imaginario, pensado como un actor fuertemente productivo.

Los más poderosos, desgraciadamente, son los que tienen todo el aparato financiero. Acá se equivocan porque piensan que es la gente de campo y todo eso y la gente de campo no es poderosa. La gente del campo, cuando viene una sequía re grande, pierde todo lo que invirtió, lo pierde, desde su trabajo de sol a sol, desde el pago del jornalero, desde la semilla, desde los tractores, desde el gasoil. Que no se equivoquen, no son los poderosos, son los que tal vez tienen

la fuerza productiva para generar ganancia, pero no son los más poderosos. Los más poderosos son los que tienen, la elite financiera (jubilada, 65 años, AMBA).

Discurso de Condicionales

Del conjunto de entrevistados, este es el grupo que de manera más tenue percibe y critica la desigualdad, aunque también tematiza (como el perfil previo) particularmente la pobreza en el país. Sin embargo, presenta una mirada relativamente optimista y, si se quiere, decimonónica de Argentina como un “país de oportunidades”: “el que quiere, puede”.

Argentina es un país que tiene, que da oportunidades, muchas. Y que el que quiere progresar por lo general, le puede costar un poco más o no, pero puede salir adelante y en desigualdad, desigualdades hay, pero creo que no tan marcadas como en otros países [...]. En la UBA está el hijo de un albañil como puede estar el hijo de un magnate millonario, eso me encanta. Y por eso te digo que no sé si hay tanta desigualdad como se dice, el que quiere, puede acá. Eso es lo que me gusta (médico, 31 años, AMBA).

Lo que uno viene viendo es que el país se va empobreciendo cada vez más. Además, la gente se empobrece cada vez más y los gobiernos, los distintos gobiernos que han sucedido en los últimos años no han logrado revertir esa tendencia, al contrario: se ha ido acelerando el aumento de la pobreza, la desigualdad, o sea, son cuestiones que lamentablemente día a día van creciendo. O sea, y uno lo puede medir en la experiencia propia, digamos, que uno tiene lo puede ir midiendo al crecimiento de pobreza, de la desigualdad, cada vez hay más desigualdad (gerente, 50 años, Córdoba).

Como visualizamos en páginas anteriores, las esferas de bienestar desde la perspectiva de desigualdad son evaluadas de manera diferente. En este caso, el país de las oportunidades aparece representado en la educación como mecanismo de ascenso social. En cambio, la dimensión económica aparece como el factor generador de crisis

e inestabilidad, que aleja la *potencia* de Argentina de su realidad. Esta diversidad hace que las explicaciones de la desigualdad en este perfil no sean plenamente asimilables a la mirada más “moralista” o “individualista” de los pro-Mercado: si bien existen oportunidades, la economía tiende a generar crisis cíclicas que hace que las personas no cuenten con las mismas chances, al mismo tiempo que no se esfuerzan en el mismo grado.

La dimensión temporal y la ambivalencia son centrales para este perfil. La apreciación del futuro oscila entre “siempre va a ser igual” y “Argentina tiene todo para...”. Esta orientación hacia el futuro, por otra parte, vuelve comprensible la perspectiva crítica de este agrupamiento respecto del funcionamiento del Estado en nuestro país: decidir todo “sobre la marcha”, “atar con alambre”, actuar siempre “sobre la emergencia”. En ese futuro, la clase media (un ancla identitaria fuerte de estatus social subjetivo para estos agrupamientos y para toda la sociedad) corre el riesgo de desaparecer.

Y es como, no sé si bronca, pero como desilusión, como que pensás que... Y a parte con esto, que es algo histórico, es lo que uno viene escuchando, ¿no? O sea, yo hace dos años que vivo solo, pero, si yo escucho a mi viejo... Como que toda la vida o yo lo escuchaba a mi abuelo decir: ‘y no, toda la vida fue igual y esto va a ser toda la vida igual’, ¿me entendés? Como que es esa sembrada de que no hay esperanza, que decís, y esto va a ser como que tenés que resignarte a vivir así, o con bronca o dejarlo pasar... Eso me genera, como decir, no avanzar nunca, como que cuesta más avanzar (profesor, 29 años, Córdoba).

Tenemos todo para ser todo y cómo es que tenemos materia prima que la mandamos afuera y compramos el producto, no tiene lógica. Lo podemos hacer nosotros, ahí está el tema de lo que es el negocio empresario, los pasamanos y donde se lava toda la plata (agente penitenciario, 29 años, AMBA).

En consonancia con los discursos del perfil pro-Mercado, la expectativa es que el Estado adopte una postura más consensual que coactiva (“sin llevarse puesto a nadie”), y que se concentre en ampliar

las oportunidades a partir de la educación pública y la generación de empleo digno. Comparten también con el perfil pro-Mercado la visión negativa de la burocracia estatal, que accede a puestos en el sector público no por su capacidad o formación, sino por contactos. En ese sentido, aparecen las demandas de “políticas de Estado” (con relativa autonomía de “los gobiernos de turno”) que habiliten planificación a futuro, “reglas claras” y la aplicación de un modelo de desarrollo estable.

—Para mí lo primero tendría que haber es una política de Estado, que hay cosas que no... que no se negocian. Yo lo que noto es que, no sé, depende el partido político, depende el presidente que esté de turno, son las prioridades. Como que viene B y las prioridades son para lo que cree y viene C y hace lo que quiere y a los cuatro años viene Z y cada uno con sus prioridades. Yo creo que lo primero tendría que ser una política de Estado, que hay pautas que no se negocian, hay cosas que son así.

—¿Qué cosas no se negociarían para vos?

—La educación primero. Segundo, la educación. Tercero, la educación. O sea, como que hay cosas que eso, y la salud (profesor, 29 años, Córdoba).

Si bien la tematización de la cuestión de la corrupción existe en este perfil de entrevistados, el eje está puesto en la cuestión del control y la eficiencia administrativa para diagnosticar el estado y la problemática de las políticas sociales.

En este perfil en particular (Condicionales) fue posible reconocer fracciones internas que se acercan o tienen puntos de contacto con uno y otro de los perfiles previos, aunque con reservas o modulaciones en relación con el “modo” de las políticas, de allí su calificación como Condicionales.

Una primera fracción, más cercana al perfil pro-Estado, entiende que las políticas sociales pueden ser una herramienta positiva para intervenir sobre la desigualdad social, pero tienen que orientarse a generar condiciones para “dar el salto”, y debe implicar un diseño de

dispositivos con mayor control y seguimiento, acciones “bien ejecutadas” y “medidas en el tiempo”, además de estar acompañadas de la estabilización de la economía y del establecimiento de reglas claras.

—Tienen que estar, son ayudas que tienen que estar bien ejecutadas y para dar el salto.

—¿Qué sería dar el salto?

—Y pegar un salto, o sea, de mejor calidad de vida, o sea, no sé si yo recibo el IFE o la Asignación Universal por Hijo, por familia, que sea para que, no sé, mi hijo pueda ir a la escuela, o sea, pueda pagar el transporte para ir, bueno, el boleto educativo es gratis, pero que sea para darle una calidad desde la vivienda, desde la comida, o sea, que sea eso para dar un salto de calidad de vida. Y, y poder, así cada día acortar esa brecha del que más calidad vida tiene y el que menos tiene (profesor, 29 años, Córdoba).

Está muy bueno el Plan Conectar Igualdad, pero yo creía que tendría que ser como con un poco más de seguimiento y dársela a los que de verdad necesitan, aunque obvio es difícil medir quién necesita más o quien necesita menos, pero hacer más seguimiento, qué se hace con esas computadoras o a quién se la dan o si tienen Internet para usar esas computadoras (trabajador de la Economía Popular, 28 años, AMBA).

En esta línea, las políticas orientadas al trabajo, la formación en oficios y la generación de empleo genuino (por sobre la opción de políticas de transferencia de ingresos) tienen preeminencia.

Por su parte, la fracción más afín a los discursos de la tipología pro-Mercado definen la aceptabilidad de las políticas sociales a partir de su focalización no solo en criterios de necesidad, sino también en competencias subjetivas: “tener ganas de progresar” o “de salir adelante”. Lo que veíamos como controles sobre la situación objetiva de las personas en la fracción anterior se vuelve selección o “casting” de personas a partir de elementos subjetivos en esta fracción. Entre estas características, se incluye la impugnación de los consumos considerados superfluos, espurios o inadecuados.

Me parece que las partes emocionales y la parte de ganas de progresar son muy importantes, muy importantes y a lo mejor darían oportunidades a un montón de gente que no se la das y por el tema de las ideologías también... Pero bueno, creo que son mayoría los que piensan que, porque, si no, no puedo entender, o sea, si vos decís ¿cómo puede ser que cada vez sea más gente la que quiere vivir de esa manera? O sea, no, no... Eso sí que no lo puedo entender, o sea, no, en un país tan rico como el que tenemos, donde hay mil cosas para hacer me parece. Y te digo por lo mismo que veo acá en el pueblo, vos decís: hablan de usurpar, el tema de las expropiaciones, por ejemplo, me parece un horror, pero no es que me parezca un horror porque, yo digo: si no pueden ser productivos en el patio de su casa porque vos vas al barrio este que yo te digo y hay antenas de DirecTV y hay, no sé, a lo mejor un montón de celulares, los chicos descalzos, no tienen una gallina, no tienen una quintita, no tienen nada en el patio de su casa que lo pueden hacer sin un centavo. Entonces, ¿qué van a producir en la tierra de otro? Si no tienen ganas de producir. Pienso en eso, en dividir a la sociedad en el que tiene ganas de progresar y de vivir mejor y en el que no y, entonces, a éste que sí tiene ganas de progresar, sí: le vamos a sacar una hectárea al gringo este que la tiene al pedo y le vamos a dar a éste para que coman de una huerta orgánica y haga, no sé, zapallo, pero realmente que sea alguien que realmente lo aproveche y que pueda ayudarlo a salir de esa situación (veterinaria, 37 años, Córdoba).

Esta apreciación más global sobre las políticas sociales ve desdibujadas sus fronteras al momento de evaluar una política como el IFE o la ATP, signadas por la excepcionalidad de la pandemia y, por lo tanto, aprobadas por el conjunto de los entrevistados en este perfil, particularmente por quienes percibieron estos beneficios (a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con la AUH, sin fecha de caducidad y con el estigma de resultar nociva en términos morales).

Al respecto de la cuestión impositiva, los entrevistados de este perfil asumen posiciones intermedias: si, por un lado, consideran necesarios los impuestos para dotar de recursos a un Estado que debe garantizar servicios esenciales como la educación, la salud, la

justicia y la seguridad, asumen posturas críticas con respecto a la “mala calidad” de estos servicios.

Si en la tipología pro-Mercado se formaba cierto escepticismo respecto de modificar esta situación a raíz de la endémica problemática de corrupción en el Estado, estos entrevistados consideran que las soluciones pueden abordarse en las dimensiones de la eficiencia administrativa, la comunicación y publicidad del destino de los fondos públicos, además de una mejora en las capacidades de recaudación estatales.

La tematización de las PyMEs parece central para comprender la evaluación de la estructura fiscal en este agrupamiento. Si bien los impuestos se califican como “regresivos”, los costos altos para los empresarios se perciben como “trabas” o “ahogos” para el desarrollo económico y, por lo tanto, como un desincentivo para la inversión que se suma a las crisis cíclicas en el país. En síntesis, los impuestos se viven como un padecimiento desde la perspectiva de los empleadores porque sienten que “trabajan para pagar impuestos”.

Por otra parte, en consonancia con el resto de los perfiles, el Impuesto a las Ganancias se percibe como un impuesto injusto, porque “el salario no es ganancia”. Sin embargo, la postura de este agrupamiento no es la eliminación o la baja de los impuestos, sino su readecuación.

El posicionamiento respecto del Impuesto a las Grandes Fortunas sigue la misma lógica. Entienden que es correcto, en primer lugar, por el contexto de excepción y, en segundo lugar, para corregir la distorsión regresiva que hace que el salario del “laburante” pague más que la “timba financiera”. Sin embargo, el impuesto también suscita enojo por su destino: los improductivos y los no merecedores, una suerte de política de Robin Hood invertida (en este punto reemerge la imagen de la sociedad en mitades, productiva y no productiva).

Volviendo a la imagen de país que se reconstruía al principio de este apartado, para los Condicionales, Argentina es un “país rico”, por lo que su foco no debería estar en lo impositivo, sino en priorizar y favorecer el desarrollo industrial. En línea con este argumento,

las elites no se perciben de manera monolítica. Los empresarios son percibidos como actores necesarios para el desarrollo económico, aliados estratégicos (“los quiero del lado del bien”) y merecedores de los recursos que tiene por el esfuerzo invertido en acumularlos. Pero también se identifican sectores no merecedores de la elite: los “fugadores”, los “timberos”,¹⁴ y los políticos que consiguen privilegios a partir del amiguismo y el acomodo.

¿Qué aprendimos sobre las disputas por la igualdad a partir de la crisis COVID-19 en Argentina?

Promediando 2020, el año uno de la pandemia, construimos una serie de interrogantes para pensar el proceso de la crisis COVID-19 en Argentina desde las ciencias sociales y desde la perspectiva de la desigualdad y las disputas distributivas.

¿Cómo se habían organizado las disputas distributivas en el país durante el siglo XXI? ¿Qué rupturas aparecieron a partir de la crisis COVID-19? ¿Qué sabemos de las percepciones y actitudes hacia las políticas redistributivas en Argentina hasta la crisis? ¿Cómo se organizan las disputas distributivas en el espacio virtual? ¿Cómo se fueron transformando las disputas distributivas en relación con la evolución de la pandemia? ¿Cuáles son los principios de justificación y legitimación a partir de los cuales las personas definen apoyos o impugnaciones a las políticas redistributivas en debate? ¿Cómo se articulan estos principios en sus propios relatos biográficos y en su propia experiencia de la desigualdad?

Nuestra aproximación a estas preguntas tuvo la intuición de que el campo de las disputas por la igualdad o disputas distributivas podía estar organizado alrededor de polos que adherían, respectivamente,

¹⁴ Forma coloquial para hablar del juego de apuestas. En este caso se refiere principalmente a la llamada “timba” o “bicicleta” financiera, que genera dividendos sin producir ni generar empleo.

a un modelo de igualdad de posiciones y a una idea de desigualdad como dinamizadora sistémica o funcional de la iniciativa individual en la sociedad. Para nuestra sorpresa, solo pudimos comenzar a comprender las disputas a partir de la identificación de ciertos consensos distributivos. Tanto la demanda de igualdad como la evaluación crítica sobre la desigualdad funcionan como núcleos de acuerdo, tendiendo puentes entre los polos de la disputa.

Claro está, este punto de acuerdo no significa homogeneidad de significaciones: las apelaciones a la desigualdad desde distintos puntos del mapa político proponen definiciones situacionales (unas más centradas en la distribución de la riqueza, otras más enfocadas en la población en situación de pobreza), atribuciones causales y, consecuentemente, resoluciones diferentes para esta problemática.

Durante el primer semestre de 2020 la emergencia de la pandemia y su gestión política generaron tanto expectativas sociales de revalorización de lo público, como una inflación de las apresuradas conclusiones académicas sobre un cambio de rumbo sistémico en una sociedad pospandémica que no termina de nacer, un año y medio después de la llegada de la COVID-19 a Argentina. Si bien el final aparece aún abierto y el proceso está todavía en marcha, la primera sensación es que la crisis sanitaria fue centrifugada en sólidas estructuras preexistentes y que su aporte tendió apenas a acelerar y morigerar dinámicas sociales que se insinuaban ya en nuestra historia reciente.

Las experiencias sociales y los paradigmas político-cognitivos previamente existentes orientaron el procesamiento simbólico del impacto de la pandemia tanto como la evaluación de las medidas tomadas para gestionarla desde el campo estatal. Esto no niega la apertura a discusiones, tematizaciones y horizontes ausentes o muy marginales previamente a la pandemia (como una política fiscal orientada a la progresividad o el debate por un ingreso universal ciudadano), pero la novedad estuvo más en la tematización que en las nuevas alianzas o agrupamientos, las nuevas categorías cognitivas y los nuevos términos de la discusión.

Las expectativas sobre la puesta en valor del sector público en este nuevo contexto se fundaron en la gestión sanitaria de la pandemia y en el sostenimiento de las condiciones materiales de los sectores más desfavorecidos a causa del parate económico. Sin embargo, renovados conflictos y rispideces surgieron en las valoraciones de lo público en torno a las inclusiones/exclusiones en sus áreas de actuación: ¿a quiénes protegió el Estado? ¿a quiénes dejó a su merced y sin ayuda? Los sectores con mayor resistencia a las intervenciones públicas sobre la desigualdad y a las políticas redistributivas en general, pero también aquellos que se sintieron dejados de lado y doblemente victimizados (por la pandemia y por la omisión del Estado), pueden conformarse en núcleos de descontento social y malestar ciudadano con altos riesgos por su erosión de la legitimidad de las intervenciones públicas con horizonte de igualdad social.

Los apoyos y críticas a las políticas redistributivas en Argentina tomaron forma en la apreciación de medidas como IFE, ATP e Impuesto a las Grandes Fortunas, pero también remitieron a preferencias políticas redistributivas previas y a comparaciones con formatos homólogos de políticas como la AUH o el Impuesto a las Ganancias.

Las controversias distributivas, tanto antes como durante la pandemia, han hecho foco en el Estado y su relación con la economía. No es de extrañar, entonces, que la preocupación por la corrupción y la ineficiencia burocrática jueguen un rol protagónico en los posicionamientos políticos en torno a la desigualdad y la redistribución, campos de problemas públicos que, a priori, no eran imaginados como plenamente conectados.

Sobre este principal factor –ideas diferentes sobre la relación entre el Estado y la economía, la extracción de recursos y los mecanismos redistributivos– se organizan los agrupamientos y se polarizan los posicionamientos en las disputas por la igualdad. Un primer agrupamiento aglutina posicionamientos fundamentalmente pro-Estado, orientados a la fiscalidad progresiva y a una defensa férrea de las políticas sociales como principal mecanismo distributivo. Los emergentes más importantes que hallamos vinculados a esta tipología

fueron: 1) su resistencia en bloque al Impuesto a las Ganancias (probablemente una de las principales herramientas fiscales con cierta progresividad existentes en el Estado argentino), bajo la consigna de “salario no es ganancia”; 2) la llamativa ausencia de una agenda económico-productiva en su relato, que lleva a una focalización casi total en el Estado como único agente de la cuestión distributiva.

Un segundo agrupamiento aglutina posicionamientos fundamentalmente pro-Mercado, resistentes a la fiscalidad progresiva (tanto por el supuesto efecto desincentivador hacia la inversión, como por la mentada corrupción endémica en el sector público) y a las políticas sociales (por el supuesto efecto desincentivador hacia la búsqueda de empleo, la iniciativa económica y la autonomía individual). Los emergentes más importantes que hallamos vinculados a esta tipología fueron: 1) su valoración negativa y desconfianza generalizada sobre todo el sector público y la política en términos genéricos; 2) su resistencia a gravar a los sectores concentrados, incluso en una situación de excepcionalidad; 3) su marcada adhesión a la moralidad del esfuerzo y la “cultura del trabajo”.

Un tercer agrupamiento aglutina posicionamientos que denominamos Condicionales, por su carácter intermedio o moderado, pero también por su acento en los “modos” de las políticas, y que combina preferencias fiscales relativamente progresivas (pero no coactivas, sino consensuadas) y políticas sociales focalizadas, acotadas en el tiempo, orientadas a la activación económica y estrictamente controladas. Los emergentes más importantes que hallamos vinculados a esta tipología fueron: 1) su expectativa de intervenciones consensuales por parte del Estado (no coactivas); 2) su fuerte orientación temporal al futuro, al modelo de desarrollo y a las “políticas de Estado” para construir previsibilidad económica y planificación estratégica; 3) sus diagnósticos ambivalentes de la situación presente (“Argentina, tierra de oportunidades” vs. preocupación por el nivel de pobreza en el país) y futura (“siempre será igual” vs. “Argentina tiene todo para...”); 4) sus definiciones políticas con acento en la

voluntad, la iniciativa, el “querer crecer” y “dar el salto”, que acercan a este agrupamiento en muchas dimensiones a la segunda tipología.

Es importante señalar que cada una de estas tipologías es relativamente heterogénea en términos socioestructurales y, si bien en algunas fuentes de datos puntuales se observa una débil asociación entre posición social –en un sentido multidimensional–, percepción y evaluación de la desigualdad y preferencias políticas redistributivas, en nuestro estado actual de conocimiento debemos señalar que dicha relación dista mucho de ser fuerte y de ser lineal. La búsqueda interpretativa tanto como las pistas para la intervención y la construcción de legitimidad vuelven, entonces, sobre las experiencias y las matrices de pensamiento económico y político.

En este marco de matrices político-cognitivas asociadas a cada uno de estos perfiles, las medidas políticas redistributivas en el contexto de la pandemia fueron juzgadas y procesadas. En términos generales, como venimos sosteniendo, la pandemia funcionó apenas como un indicador de excepcionalidad, y generó un mínimo nivel de aceptabilidad para medidas como el IFE en todos los perfiles, mucho más para la ATP en los perfiles con eje en la agenda productiva, pero no resultó del mismo modo (no produjo quiebres) con respecto al Impuesto a las Grandes Fortunas, criticado por momentos por desincentivar, pero también por su carácter obligatorio-coactivo (y, por lo tanto, “no auténticamente solidario”).

Esto último presentó una particular dinámica en redes sociales como Twitter: mientras que cuentas ligadas al oficialismo defendieron el Impuesto a las Grandes Fortunas (con cierto arreglo a la participación del mismo sector en términos legislativos), las cuentas ligadas a la oposición de Juntos por el Cambio no hicieron una crítica pública de la medida en redes (a diferencia de su participación legislativa que fue en bloque contra la medida), dejando la deslegitimación de esta política en la arena pública en manos de cuentas de *trolls*, tributaristas ultraliberales y medios masivos como el grupo *Clarín*. El carácter ambivalente de las evaluaciones sociales sobre las

elites y una suerte de sentimiento popular antielitista puede resultar un factor estratégico a explorar también en futuras investigaciones.

El acento en caracterizar a los grupos moderados, condicionales y a los consensos distributivos (y no solo a los conflictos o disensos) aparecen como líneas relevantes de la investigación a futuro y de una agenda programática para avanzar sobre dichos consensos para tanto mitigar la polarización como reducir las brechas de desigualdad. Como planteamos al respecto de nuestra sorpresa cuando encontramos que la polarización en el debate distributivo se organizaba mucho menos en torno a las preferencias por la igualdad/desigualdad que por las representaciones y definiciones sobre el Estado y el Mercado como factores de diferenciación fundamentales, es necesario remarcar como un hallazgo crucial de nuestra investigación el hecho de que tengamos muchos más puntos en común que lo que solemos percibir.

Los sujetos imaginados o las representaciones sobre los actores de esta disputa distributiva son un punto fundamental en nuestro análisis. La cobertura de medios sobre la pandemia muestra cómo con el correr de los meses se operó un giro de 180 grados en la construcción simbólica de víctimas de la pandemia, la cuarentena y el ASPO. Si primero la preocupación de medios estuvo concentrada en las familias en condición de pobreza, en la interrupción de sus ingresos económicos inestables y en las dificultades para la provisión material más básica, al promediar el primer semestre la tendencia de los medios viró hacia la victimización de empresarios, afectados por el estancamiento económico, la caída del consumo y las medidas redistributivas.

Todas y cada una de las tipologías discursivas que aquí construimos tematizan la desigualdad con foco en la condición de pobreza. Solo el perfil pro-Estado tiende a conectar en sus relatos las explicaciones de la pobreza con el otro actor clave de la disputa distributiva: las elites. Las representaciones sobre estos sectores distan mucho de ser monolíticas y son parte fundamental del conflicto simbólico por la igualdad. Ancladas justamente en la ausencia/centralidad de la

agenda productiva en sus discursos, las elites son personificadas por sindicalistas y políticos, en algunos casos, por empresarios y ricos en general, en otros, y también por el campo y los sectores financieros. Formateadas por el núcleo productivo/estatal de la cuestión distributiva en cada matriz, estos sectores son percibidos en términos positivos o negativos en relación con distintos principios de justicia: acumulación, productividad, esfuerzo, amiguismo, racionalidad y capacidad de construir consenso, inversión, generación de empleo, etc.

Para concluir, esta investigación se ha enfocado en uno de los eventos más traumáticos de la historia mundial reciente con un alcance verdaderamente global. Hay, por supuesto, manifestaciones y consecuencias propias a cada contexto, pero también algunas claves compartidas. Una de ellas es el fantasma que sobrevuela en las calles de cada rincón del planeta: ¿quién pagará los costos de la crisis? ¿recaerá una vez más en los cuerpos de las y los más desaventajados? En América Latina ese interrogante es aún más fuerte por la desigualdad persistente y el poder de las elites. Este trabajo intentó contribuir a saber qué está sucediendo en nuestra sociedad en un proceso en curso, para aportar conocimientos en pos de la pugna por consensos distributivos más igualitarios. En particular, nos propusimos elucidar el modo en el que se configuran y organizan subjetividades políticas en torno a los consensos distributivos, uno de los basamentos en que se fundan nuestras esperanzas de generar acciones colectivas verdaderamente transformadoras. Es el deseo de este equipo haber aportado su grano de arena a este horizonte imprescindible. Seguiremos trabajando, pensando y, en la medida de lo posible, actuando hacia un horizonte de mayor igualdad.

Bibliografía

Assusa, G. y Kessler, G. (2020a). ¿Desigualdades injustas? Transformaciones y continuidades del contexto pos-progresista en América Latina. En C. M. Stalin Herrera y V. H. Torres Dávila (coords.), *Ecuador. Debates, balances y desafíos post-progresistas* (pp. 443-472). Buenos Aires-Quito: CLACSO, Instituto de Estudios Ecuatorianos-IEE, Abya-Yala, Universidad Politécnica Salesiana.

Assusa, G. y Kessler, G. (2020b). Reactivación de desigualdades y vulneración de derechos en tiempos de pandemia. En J. P. Bohoslavsky (ed.), *Covid-19 y derechos humanos: la pandemia de la desigualdad* (pp. 93-107). Buenos Aires: Biblos.

Assusa, G. y Kessler, G. (2021). ¿Percibimos la desigualdad “realmente existente” en América Latina? *Nueva Sociedad*, 293, 25-38.

Baranger, D. (2004). *Epistemología y metodología en Pierre Bourdieu*. Prometeo: Buenos Aires.

Barreto, M. (2012). Cambios y continuidades en la política de vivienda argentina (2003-2007). *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 5 (9), 12-30.

Bayón, M. C. (2015). *La integración excluyente. Experiencias, discursos y representaciones de la pobreza urbana en México*. México: UNAM-Bonilla Artigas Editores.

Bayón, M. C. y Saraví, G. (2019). Desigualdades: subjetividad, otredad y convivencia social en Latinoamérica. *Desacatos*, 59, 8-15.

Beccaria, L. y Maurizio, R. (2012). Reversión y continuidades bajo dos regímenes macroeconómicos diferentes. Mercado de Trabajo e ingresos en Argentina, 1990-2010. *Desarrollo Económico*, 206 (52), 205-228.

Benza, G. y Kessler, G. (2020). *La ¿nueva? estructura social de América Latina. Cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas*. Buenos Aires: Siglo XX.

Bottan, N., Hoffmann, B. y Vera-Cossío D. (2020). *La desigual carga de la pandemia. Por qué las consecuencias de la COVID-19 afectan más a los pobres*. Washington: BID.

Brizuela, S. y Tumini, L. (2008). Inequidades de género en el mercado de trabajo de la Argentina: las brechas salariales. *Revista de Trabajo*, 4 (6), 53-70.

Busso, M. y Messina, J. (Eds.) (2020). *La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada*. Washington, BID.

Casero-Ripollés, A. (2020). Impact of Covid-19 on the media system. Communicative and democratic consequences of news consumption during the outbreak. *Profesional de la Información*, 29 (2), 1-11.

Castillo, J. C. et al. (2019). Meritocracia y desigualdad económica. Percepciones, preferencias e implicancias. *Revista Internacional de Sociología*, 77 (1), 1-15.

CEPAL (2010). *América Latina frente al espejo. Dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad social y el bienestar en la región*. Santiago de Chile: CEPAL-Latinobarómetro.

CEPAL (2020). *El desafío social en tiempos del COVID-19*. Informe especial Covid-19, 3, Santiago de Chile: CEPAL.

CEPAL (2021). *Panorama social de América Latina 2020*. Santiago de Chile: ONU.

CEPAL-OIT (2020). *Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política*. Santiago de Chile: CEPAL.

Choi, G. (2019). Revisiting the redistribution hypothesis with perceived inequality and redistributive preferences. *European Journal of Political Economy*, 58, 220-244.

Colle, R. (2011). *El análisis de contenido de las comunicaciones*. Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social.

Cruces, G. y Tetaz, M. (2009). Percepciones subjetivas de la distribución del ingreso y preferencias por las políticas redistributivas. *Avances de Investigación: CEDLAS*, 33.

Cruces, G. y Gasparini, L. (2009a). Desigualdad en Argentina. Una revisión de la evidencia empírica I. *Desarrollo Económico*, 48 (192), 395-437.

Cruces, G. y Gasparini, L. (2009b). Desigualdad en Argentina. Una revisión de la evidencia empírica II. *Desarrollo Económico*, 49 (193), 3-29.

Cuneo, C. J. (1996). International Images of Social Inequality. A ten Country Comparison. En A. Frizzell y J. H. Pammett (eds.), *Social Inequality in Canada*. Ontario: Carleton University Press.

Dubet, F. (2015). *¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario)*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Duc Huynh, T. L. (2020). The COVID-19 risk perception: A survey on socioeconomics and media attention. *Economics Bulletin*, 40 (1), 758-764.

Evans, M., Kelley, J. y Kolosi, T. (1992). Images of Class: Public perceptions in Hungary and Australia. *American Sociological Review*, 57 (4), 461-482.

Gras, C. y Hernández, V. (2013). *El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización*. Buenos Aires: Biblos.

Grimson, A. y Roig, A. (2011). Percepciones sociales de los impuestos. En J. Nun (comp.), *La desigualdad y los impuestos (II)*. Buenos Aires: Capital intelectual.

Grimson, A. (2015). Percepciones sociales de la desigualdad, la distribución y la redistribución de ingresos. *Laboratorio*, 26 (15), 197-224.

Gutiérrez, A., Mansilla, H. y Assusa, G. (2021). *De la grieta a las brechas. Pistas para estudiar las desigualdades en nuestras sociedades contemporáneas*. Villa María: EDUVIM.

Hochschild, J. (1981). *What's fair? American Beliefs about Distributive Justice*. Massachusetts: Harvard University Press.

Kessler, G. (2007). Principios de justicia distributiva en Argentina y Brasil. Eficacia global, igualitarismo limitado y resignificación de la jerarquía. En A. Grimson (comp.), *Pasiones nacionales. Política y cultura en Brasil y Argentina*. Buenos Aires: Edhasa.

Kessler, G. (2015). Desigualdad en América Latina ¿un cambio de rumbo? *Carta mensual INTAL*, 221.

Kessler, G. (2019). Algunas reflexiones sobre la agenda de investigación de desigualdades en Latinoamérica. *Desacatos*, 59, 86-95.

Krippendorff, K. (1990). *Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica*. Barcelona: Paidós.

Lindemboim, J., Kennedy, D., y Graña, J., (2010). El debate sobre la distribución funcional del ingreso. *Desarrollo Económico*, 49 (196), 541-571.

López-Roldán, P. (1996). La construcción de una tipología de segmentación del mercado de trabajo. *Papers*, 48, 41-58.

- Mansilla, H. (2011). *Nuevos Consumos Culturales. Tecnologías y bienes simbólicos. Aportes teórico-metodológicos*. Villa María: EDUVIM.
- McCall, L. (2013). *The Undeserving Rich. American Beliefs about Inequality, Opportunity, and Redistribution*. Nueva York: Cambridge University.
- Newman, N. et al. (2020). Reuters Institute Digital News Report 2020. *Reuters Institute Digital News Report 2020*. www.leibniz-hbi.de
- Nun, J. (2011a) *La desigualdad y los impuestos. Introducción para no especialistas*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Nun, J. (Comp.) (2011b). *La desigualdad y los impuestos. Materiales para la discusión*. Buenos Aires, Capital Intelectual.
- Piovani, J. I. y Salvia, A. (2018). *La Argentina en el Siglo XXI*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- PNUD (2021). *Informe Regional de Desarrollo Humano 2021. Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe*. Nueva York: PNUD.
- Puga Rayo, I. (2011). Lo justo y lo posible: desigualdad, legitimidad e ideología en Chile. En M. Castillo, M. Bastías y A. Durand (comps.). *Desigualdad, legitimación y conflicto. Dimensiones políticas y culturales de la desigualdad en América Latina*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Rodríguez, S. A. (2014). Percepciones de la desigualdad socioeconómica. Un estudio exploratorio para el caso argentino. *Revista de Ciencias Sociales*, 27 (34), 93-118.
- Sachweh, P. (2012). The moral economy of inequality: popular views on income differentiation, poverty and wealth. *Socio-Economic Review*, 10, 419-445.

Salvia, A. (2012). *La trampa neoliberal. Un estudio sobre los cambios en la heterogeneidad estructural y la distribución del ingreso en la Argentina: 1990-2003*. Buenos Aires: Eudeba.

Saraví, G. (2015). *Juventudes fragmentadas. Socialización, clase y cultura en la construcción de la desigualdad*. México: FLACSO-CIESAS.

Saraví, G. (2016). Miradas recíprocas: representaciones sobre la desigualdad en México. *Revista Mexicana de Sociología*, 78, (3), 409-436.

Scalon, C. (2004). Percepção das desigualdades. Uma análise comparativa internacional. En C. Scalon (org.), *Imagens da desigualdade*. UFMG-IUDERJ/UCAM.

Segovia, C. y Gamboa, R. (2015). Imágenes de la desigualdad en Chile. El impacto de factores económicos y políticos. *Papel político*, 20 (2), 481-500.

Sili M. y Soumoulou, L. (2011). *La problemática de la tierra en la Argentina. Conflictos y dinámicas de uso, tenencia y concentración*. Roma: FIDA.

Zunino, E. (2021). Medios digitales y COVID-19: sobreinformación, polarización y desinformación. *Universitas*, 34, 133-154.